

n=184 4400

imprecor

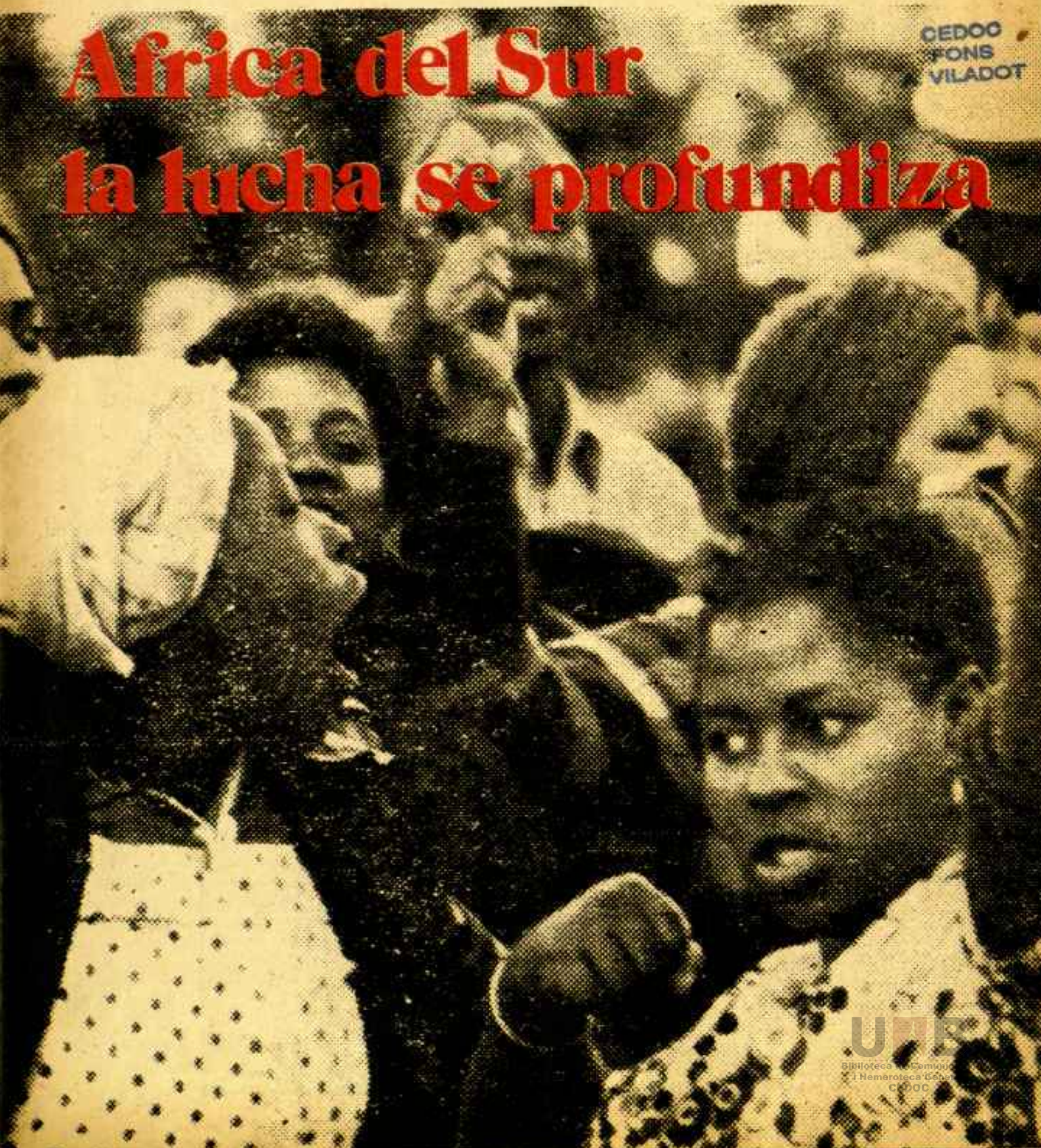
correspondencia de prensa internacional

quincenal, N. 57, 16 de setiembre de 1976

30fb, 40pts, 0,75\$

Africa del Sur la lucha se profundiza

CEDOC
FONS
VILADOT



UNE
Biblioteca de Comunicació
i Memòria de l'UNE
CEDOC



INPRECOR. Los artículos firmados no representan necesariamente el punto de vista de la redacción.

CEDOC
FOM
A VIUAD

¿ya te suscribiste a
inprecor?



INDICE

AFRICA DEL SUR

Se profundiza la lucha contra el apartheid.
- Langa pág. 3-7

ESPAÑA

El último asalto
- Pedro Aguirre pág. 8-16

GRAN BRETAÑA

Amenaza racista
- Andrew Jenkins pág. 17-21

FRANCIA

El desacuerdo Giscard-Chirac
- Pierre Frank pág. 21-23

SUECIA

Ante las elecciones
- Tom Gustafsson & G. I. Johnson pág. 24-27

MEXICO

La izquierda progresa
- F. G. Casillas pág. 28-30

CAMARADA ROBERTO SANTUCHO

- S. U. de la IV Internacional pág. 31

CAMPANA DE APOYO A INPRECOR

pág. 32

inprecor ¡cambia de precio!

1-Trans. Bancaria: Gisela Scholtz, Sociedad Gral de Banco
Agencia Dailly, 1030 Bruselas Cuenta Co. No 210-0320173-28

2-Orden Postal Internacional: Gisela Scholtz, Bruselas
Cuenta Co. No CCP000-1085001-56

En ambos casos debe enviarse el nombre del suscriptor haciendo constar la cantidad enviada a Inprecor

NOMBRE

DIRECCION

ENVIE LA CANTIDAD DE

Envío Normal

Europa: 650fb

17\$

1100pts.

Avión

USA, Mexico, Centroam. 24\$

Resto America Latina 26\$

Impreso

800fb

1350pts.

Impreso Avión

32\$

Envío Certificado

1180fb

1900pts.

46\$

UAB

Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General
CEDOC

Africa del Sur



Se profundiza la lucha contra el apartheid

Langa

Según las cifras oficiales, 172 negros han sido asesinados, y 1200 heridos por la policía sudafricana en Soweto, Alexandra y otros campos de mano de obra barata, en los barrios de Johannesburgo y de Pretoria, del 16 al 20 de junio. Sin armas, los negros se han levantado contra el empleo de las lenguas bantúes y del afrikán, por el uso del inglés como lengua de enseñanza en las escuelas, contra el "bantu education Act", contra la partición de África del Sur entre un "África del Sur blanco" y una serie de "homelands" (reservas) bantúes y contra la retirada definitiva para los no-europeos de la nacionalidad y de la ciudadanía sudafricana, así como su sustitución por un "homeland" tribal y una ciudadanía "racial". La base de este levantamiento era la lucha por una nación, única e indivisible, sin fronteras ni razas.

Rechazo del paternalismo

Las mismas cuestiones fundamentales se situaron en el centro de las explosiones que se extendieron por toda el África del Sur durante el mes de agosto, en el transcurso de las cuales fue masacrado más de un centenar de negros (siempre según las cifras oficiales). Los boicots masivos de los nuevos centros de enseñanza (levantados en función de las normas de la política de los bantoulands) concluyeron frecuentemente con el incendio de los edificios. Las motivaciones que se hallan en la base de estas acciones son las reivindicaciones por vivir en las ciudades en tanto que ciudadanos de pleno derecho. Se incendiaron varias misiones en los alrededores de Johannesburgo, y, más tarde, a mediados de agosto, cerca de Port-Elisabeth, al este del Cabo. En este lugar, la motivación era la misma: el rechazo del paternalismo imperialista y racista liberal, católico y anglicano de

los blancos, de la segregación secular practicada por las iglesias europeas, el adoctrinamiento sistemático y el embrutecimiento intelectual del pueblo oprimido. En el Transkei, que se hará independiente el 26 de octubre de 1976, decenas de millares de estudiantes se manifestaron contra "la autodeterminación étnica" y por una ciudadanía única sudafricana común a todos. Fuera de tenidas 286 estudiantes. En el "Homeland Botswana", los trabajadores incendiaron el "Parlamento", construido por el Primer Ministro Vorster y los Quislings tribales de Mafeking.

El contenido de las luchas generalizadas era el rechazo total a la partición racial y la reivindicación de la igualdad absoluta (lo cual no tiene nada que ver con la noción racista y paternalista americana de "integración"); estas eran las características de la lucha de los trabajadores y de los estudiantes. La estrategia de Vorster consistía en detener no solamente a quienes no colaboraban, sino también a los colaboracionistas. El 24 de agosto, el número total de arrestaciones llevadas a cabo desde el 16 de junio se elevaba a más de 2000, y la cifra oficial de muertos a 282, entre ellos 3 blancos y policías.

La zanahoria y el palo

El Departamento de Asuntos Bantúes y el Gobierno, apoyados por el Partido Unificado probritánico y por la "oposición" liberal, adoptaron la política de la zanahoria y el palo contra el levantamiento. La zanahoria no era sino la celebración de conferencias con los "dirigentes" de Soweto, a fin de conceder ciertas ventajas materiales a un grupo social de arribistas, compuestos de profesionales liberales y de comerciantes del ghe-

to, y el permiso concedido a los jefes del Bantustán, Matanzima, Buthelezi y otros, de reunirse en el aeropuerto de Jan Smuts el 21 de agosto, a fin de denunciar la represión de la lucha contra el Bantustán y el apartheid. La política del palo fue expresada claramente por Michael Botha, un ministro del Gobierno, el 20 de agosto: "Los negros de las ciudades estaban presentes en las regiones blancas para vender su fuerza de trabajo; y para nada más. Los que han aceptado la ciudadanía de un "homeland" serán mejor acogidos en las regiones blancas que los que lo han rechazado". Pero la lucha de los negros se hallaba dirigida a la vez contra la política del palo y contra la política de la zanahoria del régimen boer racista, creado por los británicos, y apoyado por la CEE, la OTAN y el imperialismo británico.

La unidad de los no-europeos

En un contexto marcado por el lanzamiento de una huelga general de más de 250 000 trabajadores cerca de Johannesburgo, en el transcurso de la primera y de la tercera semana de agosto, y de luchas antirrazales en las reservas y en los "homelands" (reservas rurales de mano de obra barata), la lucha se extendió a la provincia del Cabo. Capas de la llamada "población de color" (definida por la Ley sobre el registro de la Población como "ni blanca ni negra"), manifestaron su oposición a la "bantustización" de la enseñanza y de la ciudadanía. El Gobierno no consiguió separar a este sector de los oprimidos del sector africano. Los estudiantes del colegio "Bush" —colegio reservado a "gentes de color"—de Belville, cerca de el Cabo, se movilizaron en apoyo de Soweto en el transcurso de la segunda semana de agosto; muchos de ellos fueron detenidos. Se produjeron también acciones de solidaridad con los negros por parte de las "gentes de color" en la región occidental de el Cabo el 24 de agosto, después de que treinta obreros y estudiantes (según fuentes oficiales) hubieran sido asesinados en una reserva africana en el exterior de la ciudad. Según informaciones no reproducidas en la prensa occidental, en Worcester y otras ciudades de la región occidental de la provincia de el Cabo, los estudiantes "de color" desafiaron a las patrullas de policías que con sus perros se hallaban emplazadas ante las rejillas de las residencias y de las escuelas del Estado. En la gigantesca reserva para "gentes de color" de Bantevue, en el Cabo, la policía abrió fuego contra una manifestación de 5 000 trabajadores y estudiantes de "color", matando a varios de ellos. Esta reserva fue cercada por la policía los días 26 y 27 de agosto. Estas manifestaciones estaban dirigidas contra el "Departamento de Asuntos de Gentes de Color", contra la tribalización de estos últimos, así como contra el Departamento de Asuntos Bantúes y la tribalización bantú.

Los manifestantes declararon: "Jamás estaremos del lado de los blancos, estamos del lado de los negros". Esto, unido a la no colaboración, es la herencia del Non-European Unity Movement, Movimiento por la Unidad de los No-europeos. El NEUM ha sido rehecho por la nueva generación de no colaboracionistas, ensamblando con los de la vieja generación que han permanecido activos.

La prensa occidental informó de la existencia de disturbios antiindios en Soweto: es falso. Según nuevas informaciones, se produjo un accidente, debido a que un indio fue tomado por un blanco, mientras que en otros casos, los indios contribuyeron con su apoyo material a los negros, e incluso con su apoyo político en dos de las regiones. A menos que los agentes gubernamentales en el movimiento "Black Consciousness" (Movimiento de la Conciencia Negra) consigan desviar la lucha, el Gobierno se verá incapacitado para repetir los programas antiindios organizados por los británicos en Durban en 1949.

Aceite sobre el fuego

En una atmósfera de casi pánico total, marcada, entre otras cuestiones, por una baja del 20% de las acciones mineras de la "Rand and Free State" en el mercado bursátil mundial (acciones poseídas por unas trescientas compañías británicas, alemanas, francesas, italianas, americanas, canadienses, israelitas y australianas, aparte de las compañías asociadas anglo-boers), el Gobierno hizo un cierto número de "concesiones" precipitadas. Ofreció la abolición de la lengua afrikáans en tanto que lengua obligatoria en la enseñanza. Los estudiantes y los enseñantes respondieron exigiendo la retirada de la policía y del control del Departamento de Asuntos Bantúes, así como la liberación de los estudiantes y de los obreros encarcelados. Las escuelas fueron boicoteadas, y en algunos casos incendiadas. La cuestión de la enseñanza bantú sigue siendo la cuestión central, que como tal se ha extendido a todas las reservas principales, a todas las grandes regiones urbanas de África del Sur.

El Consejo Nacional Africano (ANC, African National Council) y el Partido Comunista, poco preparados para hacer de la educación en bantú y de los Bantustanes un objetivo político central, fueron tomados de improviso. A Winnie Mandela y otros, en Johannesburgo, se les ofreció repentinamente la posibilidad de difundir en la televisión gubernamental los discursos militantes pedidos y esperados por los racistas, con el objetivo de desviar la lucha de las cuestiones centrales de la enseñanza en bantú y de los "homelands" hacia las demostraciones habituales y "militantes" de la ANC, que separan la lucha por la supresión de los "pasaportes interiores" de la lucha por objetivos políticos de conjunto.

Cuando esta maniobra de la clase dirigentes fracasó Winnie Mandela fue detenido. Estas detenciones de miembros de la ANC y de otras organizaciones (como la SASO, Organización de los estudiantes sudafricanos) tenían como objetivos, de un lado, aterrorizar a la población, y, por el otro, poner en primer plano a los líderes colaboracionistas, vistos de este modo por la población como dirigentes combativos. El mismo objetivo se perseguía con la detención de la "oposición" a Matanzima del Partido Democrático, colaboracionista del "homeland" de Transkei, lo cual permitía en parte a Matanzima (Quisling de Vorster) utilizar el Nungu ("palamento fantasma" del homeland) y presentarse como la oposición leal a Vorster.

La última concesión de Vorster y de su ministro de Justicia, Kruger, fue la de ofrecer el "derecho a la posesión de su casa" a un puñado de aspirantes de la pequeña burguesía de Soweto. De esta forma, estos podían garantizarse el poder comprar su propia jaula, en lugar de tener que alquilarla al Departamento de Asuntos Bantúes. Esta maniobra tenía por función evidente cortar a algunos sectores de la población de las masas trabajadoras. Fue un fracaso. Porque la lucha contra la "bantoustización", que se había lanzado en Soweto, estaba dirigida precisamente contra el sistema de las reservas, que formaba parte del fraude de las "homeland".

Por la misma razón, la concesión tan cacareada por Vorster, el 8 de agosto (de que los residentes en Soweto y en otras reservas "dirigirían sus propios asuntos") no era, en modo alguno, una concesión, sino más bien una intensificación de la "autodeterminación bantú", de la "autonomía bantú", así como de la política de "autoimposición" de la dominación blanca. Las concesiones del régimen no hicieron más que añadir aceite al fuego.

Durante la última semana de agosto, el gobierno, apoyado por los jefes de las Cámaras de las Minas, del Comercio y de la Industria (que decretaron la caza de los huelguistas) consiguieron un éxito parcial en su utilización de colaboradores "zulúes" con el objeto de manipular a los "Impis" retribalizados (asociaciones guerreras) para atacar a los estudiantes y a los huelguistas. Más de treinta de éstos fueron asesinados, unos por la policía, otros por bandas armadas mientras que la policía observaba el espectáculo desde sus vehículos blindados construidos por el Mercado Común.

La misma huelga fue seguida en un 90% en los grandes centros industriales de Langlaagte y de Industria, y en un 100% en los grandes almacenes de la ciudad. Sin embargo, en las grandes firmas industriales y en las minas, el corazón de toda la economía sudafricana, lo mismo que en los grandes servicios municipales, no se produjo ni una sola huelga.

La concesión de Namibia a Alemania

Paralelamente con esta política de la zanahoria y el palo, como reacción a los acontecimientos de Soweto, Vorster anunció que Namibia se haría "totalmente independiente" el 31 de diciembre de 1978. Hasta esa fecha, estaría dirigida por un gobierno interino con dominación blanca, y a su cabeza se situará un "jefe" africano. Este ha sido el primer fruto de las entrevistas entre Vorster-Schmidt-Kissinger, mantenidas en junio último en Alemania, en el desarrollo de las cuales el segundo de ellos, en nombre del imperialismo alemán, reclamó la independencia para Namibia, que se convertiría entonces en una neocolonia, en la que los bienes de los antiguos nazis alemanes, que controlan aún una vasta proporción de la economía, estarían garantizados.

La SWAPO (Organización del Pueblo de África del Sur) y la ANC, de acuerdo con sus inspiradores blancos del PC, liberales, anglicanos, católicos, están marcadas profundamente por una tradición de trabajo en el

marco del apartheid político. Desde 1922, el mismo PC llama a la puesta en pie de una "África del Sur socialista blanca", cuando lo hizo con ocasión de una huelga de los mineros blancos contra los mineros africanos, que habían conseguido el derecho de acceso al trabajo cualificado. El PC, desde su formación por la aristocracia obrera blanca y por los liberales europeos, gestionó los sindicatos dominados por el apartheid y violó las decisiones de boicot por los no-europeos a las elecciones celebradas dentro del sistema del apartheid, presentando a comunistas blancos en calidad de "representantes indígenas", según las normas de la ley de 1936 sobre la elección de los indígenas (Native Representation Act). Durante los dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el PC colaboró con los nacionalistas boers pronaazis, y, más tarde, giró hacia un apoyo al general Smuts y al imperio británico. Hasta hoy día, ninguno de estos partidos consideró con seriedad la ley sobre la enseñanza bantú o sobre los bantoustán. En la actualidad, hacen todo lo posible para tratar de aprovecharse de las luchas autónomas de las masas trabajadoras. Estas masas trabajadoras luchan contra la "bantoustización" porque saben que este es un medio esencial para despojarlos de sus derechos. Los trabajadores oprimidos quieren poner término a este estado de cosas. Quieren expropiar a los que les despojan, para apropiarse de la totalidad del África del Sur y disponer de los plenos derechos democráticos para todos, sobre una base no racial (y no multirracial, lo que es, en la práctica, racista). No existe más que una base para la autodeterminación de África del Sur: la expropiación de los expropiadores y la liberación de los oprimidos. Esta es una reivindicación combinada e indivisible. Esta indivisibilidad es precisamente el dilema al que hacen frente los imperialistas de este "pueblo de señores" (Harrenvolk), que saben que no pueden dividir la cuestión de la propiedad de la de los derechos democráticos, de la liberación, tal como ha ocurrido en el resto de África (Nigeria, Kenya, Tanzania...)

Los trabajadores de Soweto dijeron claramente: 'No queremos Soweto. No queremos un bantoustán del Transvaal o su ciudadanía. No queremos gestionar nuestros propios asuntos en Soweto o en otro de vuestros campos de trabajo. No queremos un desarrollo separado. No queremos nuestra propia identidad, tribal o nacional, que no es más que la identidad de la esclavitud de la segregación, de la mano de obra barata. No queremos la partición del África del Sur en una parte blanca y en una parte negra, que es, en todo caso, la realidad actual. Rechazamos la idea de que los boers formen una nación, al igual que los ingleses, los judíos, o los blancos en su totalidad'. Aunque esto no se haya expresado de una manera explícita, el objetivo implicado claramente en la revuelta fue el desmantelamiento de toda la máquina y de todo el sistema de segregación, y la construcción de una nación indivisa y no racial, con los plenos derechos iguales para todos, con la totalidad del territorio como propiedad de una sola y única nación. Esto, y solamente esto, representa la autodeterminación para los oprimidos de África del Sur. Esto, y solamente esto, se halla implicado en el rechazo de la enseñanza bantú por las masas de Soweto, y en el rechazo de la "independencia" del Bantoustán. Todo estatuto se

parado para los grupos particulares no es más que un fraude racista, que tiene por objetivo la persistencia del statu quo de la supremacía blanca.

Soweto: una lucha de la clase obrera

Soweto, Alexandra y los demás "centros urbanos" en los que se han producido los levantamientos de junio contra la enseñanza bantú, son ghettos-campes de trabajo de la clase obrera. Cerca de la mitad de la clase obrera urbana no europea (negros, mestizos, indios) viven en estos "centros urbanos". Estas reservas, así como los conjuntos de viviendas de las minas y de la industria pesada (que son principalmente campos de concentración para la mano de obra barata soltera) se hallan situados en la célebre región del Rand, un cinturón industrial y comercial de un centenar de kilómetros, en donde se encuentran las minas de oro, uranio y carbón. La ciudad de Johannesburgo es el corazón de este cinturón. La mayor parte de los medios de producción de este cinturón industrial son detentados por el imperialismo británico, en asociación con otros inversores imperialistas del Mercado Común y de capitales americanos, canadienses, australianos e israelitas. En otras palabras, es una concentración del capitalismo mundial.

Los trabajadores africanos de este cinturón viven en ghettos raciales gigantescos, en la periferia de las ciudades de Johannesburgo, de Benoni, de Germiston, etc., alejados y aislados de las calles de dichas ciudades, de los bares, de los cafés, de los parques, de los edificios públicos, de los cines, de los teatros, de las piscinas, de las escuelas, de las universidades, de los hospitales, etc. No tienen sindicatos ni derechos políticos. No pueden poseer una casa, ni un apartamento, ni elegir un lugar de residencia. Ni siquiera tienen el derecho a vivir permanentemente en las reservas que lindan con los barrios, pues este se halla estrictamente limitado según las viejas leyes impuestas por los británicos en el siglo XIX, sobre la "circulación interior" con pasaporte. Las familias de los mineros viven a millares de kilómetros, en los "bantoustán", reservas de mano de obra barata rurales, sin ciudades ni industrias. Paralelamente, los trabajadores de la industria pesada y de los transportes están, a gran escala, separados de su familia, y viven en conjuntos para trabajadores o en baracas.

Esta "desurbanización del proletariado" es una vieja política de la clase dirigente. Se halla ligada a la negativa a otorgar tierras a posibles campesinos. Todo esto fue creado y mantenido principalmente por el imperialismo británico. Los boers son esencialmente los "managers"; los obreros blancos forman la aristocracia obrera y la burocracia, aliados con los capitalistas boers británicos y europeos, contra la clase obrera no europea, que es la única que produce la plusvalía en África del Sur. Esta es la estructura social de clase en la que Soweto estaba integrada como un sector mayor de la clase obrera industrial sudafricana, que ve como se le niega formalmente el derecho al trabajo cualificado, trabajo que en la práctica realiza, para ser pagada según las tasas de no cualificado.

Los trabajadores de Soweto en lucha contra el apartheid constituyen una parte integrante y fundamental del proletariado internacional. El hecho de que la historia no haya formado a esta clase en el molde clásico, el que no sea verdaderamente urbana o industrial, es en sí característico de la naturaleza específica semicolonial de este proletariado. Pero se trata de un proletariado, y Soweto, como Sharpeville en 1960, forma parte de la larga historia de la lucha del proletariado internacional por su emancipación del capital.

Los fraudes de la autodeterminación y de la independencia

El régimen de Vorster, en colaboración con el imperialismo del Mercado Común y el imperialismo americano, con el apoyo total de todos los grupos sociales blancos de África del Sur (afrikans, ingleses, judíos y alemanes principalmente) opone, de forma cada vez más apremiante, la consigna de la "autodeterminación" a las reivindicaciones de igualdad y de democracia no racial condicionada.

En países como África del Sur, en donde los blancos viven en un "país imperialista" y los no blancos en una semicolonía (o una colonia, como decía Trotski en su carta de 1935 a los camaradas de África del Sur), la "cuestión nacional" se plantea de forma diferente a como se planteaba en la Rusia zarista. En Rusia, los zares mantenían una política de rusificación, negando los derechos nacionales de los georgianos, uzbekos, polacos, cosacos, etc., impidiendo la formación de Estados nacionales en el seno del Imperio, negándoles el derecho a la autodeterminación y a la secesión. En África del Sur, el imperialismo boer y británico ha tratado siempre de crear miniestados tribales separados, impulsando las lenguas tribales, impulsando el desarrollo de la "entidad tribal", y creando territorios separados para los blancos y para los "negros". Los territorios de estos últimos se dividen además entre los africanos, los indios y los "mestizos". La población africana se hallaba aún más dividida, en función de líneas de separación conservadas artificialmente y, en ocasiones, retrozadas para la causa. La penúltima forma de esta empresa fue la política del gobierno indirecto. La última la ha sido la creación de los llamados Estados Bantúes "independientes", en donde los shosas detentarán la ciudadanía shosa en el Shosland, lo mismo que los zulúes en el Zululand. Todos los no europeos pierden, pues, su ciudadanía sudafricana. Bien entendido, los blancos serán los únicos ciudadanos de la República blanca de África del Sur.

Contra la política de rusificación de los zares imperialistas y racistas, los pueblos oprimidos de Rusia lucharon, y obtuvieron después de la Revolución, por la autodeterminación nacional, por la formación de Repúblicas autónomas con el derecho a separarse, derecho que se ejerció en algunos casos. Contra la política de la autodeterminación racista del imperialismo blanco de África del Sur, los oprimidos defienden la unidad y la igualdad a las que el régimen racista de África del Sur se opone,

apoyado por Occidente. La "autodeterminación" impulsada por el régimen desemboca en: 16 millones de africanos o bantúes que residen en homelands tribales, sin ciudades, sin industrias, sin prosperidad; dos millones de "gentes de color" que viven principalmente en el Cabo; 1 millón de indios, principalmente en Natal, situados en parecidas condiciones.

De esta forma, el 9 de agosto, después de los acontecimientos de Soweto, Vorster nombró una nueva "comisión de consejeros" para su gobierno, encargada de estudiar las modalidades de integración de estos dos últimos grupos en su plan de partición. La comisión precedente había recomendado que se tomaran medidas para iniciar una integración política. Esto fue rechazado en 1976 por el Gobierno. El hecho de que sectores de las "gentes de color" oprimidas arriesguen sus vidas manifestando su solidaridad con la lucha de Soweto en el transcurso de las dos primeras semanas de agosto, expresa el fracaso de todo intento por parte del Gobierno de alinear a las "gentes de color" del lado de los blancos. Pero no parece probable que esto sea aceptado ni por los blancos ni por los negros. Esto significaría la concesión de salarios iguales; lo cual arruinaría a la industria propiedad de los blancos, y a la agricultura en las provincias del Cabo y Natal. Representaría el primer paso hacia una igualdad política general y hacia una integración social, o lo que es lo mismo, la misma reforma impulsaría la escalada.

En fin, con la política de autodeterminación racista del Gobierno, 4,5 millones de blancos permanecerían como los únicos ciudadanos y poseedores del 90% de las tierras de África del Sur, detentadores de las ciudades, de los ferrocarriles, de los puertos, de los aeropuertos, de las minas, de las granjas, de las universidades, de los hospitales y de los recursos mineros. De hecho, las reivindicaciones de los opresores blancos y las de los oprimidos negros apuntan ambas a la totalidad del África del Sur. Ninguna de las dos partes puede o quiere aceptar un Estado o una ciudadanía que no vaya unida a esta totalidad. En este contexto, toda "autodeterminación" para un grupo étnico particular es un concepto blanco totalmente racista. Esto es lo que define la cuestión nacional en África del Sur. La única solución posible es la ciudadanía plena y la igualdad en un único Estado no racial, como ha señalado siempre el "Movimiento por la Unidad No-europea".

Gestionad vuestros propios ghettos

Un aspecto central de la política de "bantustización" es el "autogobierno" local en cada reserva y en cada conjunto en el interior del Estado blanco separado de África del Sur; es decir, en el 90% del territorio detentado por los blancos después de la partición. En el interior de Soweto, por ejemplo, que como la mayor parte de las reservas, se halla dividido en unidades tribales artificiales, el viejo sistema del Consejo de Gestión de la Reserva adoptará nuevas formas tribales. Los shosas de Soweto "dirigirán sus propios asuntos", lo que significa el empleo obligatorio de la lengua shosa en la ense-

ñanza, a fin de profundizar el proceso de tribalización. Los zulúes tendrán sus "propios consejos", con el zulú como lengua de enseñanza, etc. Puede existir un consejo "intertribal" para toda la reserva de un millón y medio de habitantes. Tendrán su "propia" policía tribal para mantener el orden. Todo esto no es coyuntural, sino que es la "solución" al problema de Soweto anunciada por Vorster, Botha y Kruger el 9 de agosto.

Esta forma de autogobierno local concedida a no-ciudadanos que no disponen de ningún derecho, que son los futuros trabajadores inmigrados, poseedores de una ciudadanía de un bantustán alejado, ha sido fuertemente rechazada por la población de Soweto y de Alexandra, inmediatamente después de que Vorster la anunciara. El rechazo tomó la forma del incendio de edificios gubernamentales, de escuelas, de medios de transporte, y de una huelga general que duró tres días y que fue ampliamente seguida. Solamente en Soweto, unos doscientos mil trabajadores abandonaron el trabajo. Estas acciones no se llevaron a cabo en los lugares de trabajo ni en las ciudades, que se hallan bajo el control total del régimen, y en donde los blancos son mayoritarios, sino en los mismos ghettos. La huelga expresaba claramente la voluntad de los trabajadores: "No queremos Soweto. No queremos Johannesburgo. No queremos reservas bantustán. Queremos la totalidad de África del Sur!". Éste fue el rechazo implícito, pero profundamente enraizado, de tal "autodeterminación", y su sustitución por la reivindicación de los plenos derechos democráticos, que llevó a Vorster a decir que sus Quislings situados en las reservas no eran "capaces o no deseaban" colaborar con él.

Las compañías multinacionales imperialistas financieras y mineras, que poseen de hecho África del Sur, se encuentran contrariadas por la baja de las acciones de las minas de oro de África del Sur, y por la baja del mismo precio del oro (especialmente, y de forma paradójica, en plena recuperación económica). El boicot por los trabajadores de los países imperialistas a las importaciones y exportaciones de y hacia África del Sur, particularmente de oro, uranio, diamantes, petróleo y armas, ayudaría considerablemente al proletariado sudafricano en su lucha contra el racismo y el apartheid. El boicot es despreciado y considerado como insignificante por los colaboradores potenciales del PC y de la ANC, así como por los liberales occidentales y por el Consejo Mundial de las Iglesias, cuyos miembros poseen fuertes inversiones en África del Sur.

Este boicot sólo se convertirá en un arma de liberación si se apoya en el principio de no colaboración con el imperialismo, si se convierte en un arma de la clase obrera internacional. Esto requiere una explicación, acciones de la clase obrera, un "sacrificio", en relación a sus propios intereses inmediatos y nacionales, en favor de los intereses internacionalistas y a largo plazo del proletariado mundial, del que los trabajadores de Johannesburgo, Soweto, Port Elisabeth, de la ciudad del Cabo y de los "homelands" son una parte fundamental e indivisa.

Langa

España



El último asalto

Pedro Aguirre

En el momento en que el movimiento de masas se apresta a dar su batalla final contra la dictadura franquista, todas las contradicciones gestadas por el desarrollo capitalista español se agudizan extraordinariamente. La sociedad española se ha transformado en una sociedad capitalista desarrollada. Pero esta transformación se ha realizado bajo el marco de una dictadura sangrienta y represiva. Con ello, todas las contradicciones y toda la podredumbre características del declive imperialista, se hallan doblemente reforzadas en el Estado español.

La composición social se ha modificado sustancialmente. La población activa empleada en el campo ya no representa más que el 25%. Las grandes ciudades industriales concentran a la mayor parte de la población. La clase obrera representa más del 70% de la población.

Pero este proceso de transformación capitalista no se ha visto acompañado por reformas estructurales sustanciales. El capitalismo español ha hecho depender el "milagro" de la industrialización de factores totalmente exteriores: las divisas de los obreros condenados a emigrar a Europa, las divisas del turismo, y las inversiones extranjeras. Hoy, cuando la crisis del capitalismo internacional se ha mostrado abiertamente, se ha hecho patente la debilidad estructural del capitalismo español, su falta de competitividad frente al europeo, su incapacidad para conceder mejoras significativas al movimiento de masas en el interior del país, etc.

Durante años, el mantenimiento de la dictadura como forma específica de poder burgués, permitió a la clase dominante obtener superbeneficios a costa de la sobreexplotación de los trabajadores, e impedir la organización del movimiento de masas. Pero a lo largo de los 15 años de luchas mantenidos tras la huelga general de los mineros asturianos en 1962, el movimiento de masas ha ido imponiendo sus posiciones, ha aumentado su organización, ha arrastrado tras su movilización a todos los sectores oprimidos, y ha sellado con ello el acta de defunción de la dictadura franquista.

El régimen surgido de la derrota sangrienta del proletariado en la Guerra Civil ya no es útil para el capitalismo español. Ya no es capaz de impedir ni que la clase obrera imponga sus exigencias reivindicativas, ni que se organice. El nivel de huelgas ha alcanzado cotas similares a las de los países más combativos de Europa. Paralelamente, el mantenimiento de la dictadura constituye un factor extraordinario de politización en cada una de las movilizaciones, ya que la falta de canales legales de organización estimula la autoorganización de las masas. Finalmente, la dictadura constituye también una dificultad para la organización de la propia burguesía en partidos políticos.

El capitalismo español cobró conciencia de esta realidad hace ya tiempo. Pero se encontró en un impase total a la hora de ofrecer una solución. Abandonar inmediatamente la dictadura, hacerlo sin organizar previamente sus propias fuerzas, teniendo en frente a un movimiento obrero y a unos partidos obreros con larga experiencia de organización, arriesgaba poner en marcha un proceso acelerado hacia la revolución proletaria, incapaz de ser desviado, ni por la burguesía ni por los partidos reformistas, hacia cauces parlamentarios. Pero mantener la dictadura significaba aumentar la politización y la organización del movimiento de masas, permitir la experiencia creciente de su actividad unitaria. La vía por la que el capitalismo español intentó dar salida a esta situación fue la "reforma de la dictadura". El primer gobierno de Juan Carlos se convirtió en el agente encargado de llevarla adelante.

El fracaso del primer Gobierno

El objetivo esencial del proyecto de reforma del franquismo consistía en evitar un enfrentamiento abierto con el movimiento de masas, en evitar el derrocamiento de -

la dictadura bajo la acción directa de éstas, en evitar la apertura de un proceso prerrevolucionario. El capitalismo español esperaba poder lograr una transformación de la dictadura en un Estado fuerte, antes de que ese enfrentamiento llegara a realizarse. La conquista de una legitimidad de masas para la monarquía se situaba en el centro de dicha operación. Para ello era necesario mantener en la ilegalidad al PCE y a la extrema izquierda, favoreciendo entre tanto el desarrollo de los partidos burgueses y de la socialdemocracia, y creando las condiciones que permitieran una futura división sindical en las filas obreras.

Este proyecto exigía tres condiciones para su realización: poder establecer un "pacto interno" con el aparato de la dictadura, integrar a la "oposición democrática", y desmovilizar al movimiento de masas.

Lejos de aceptar la reforma de la dictadura, el aparato del régimen opuso una feroz resistencia. Así, el gobierno se encontró con que su proyecto, cuya materialización debía de efectuarse a través de las Cortes y del Consejo del Reino, se enfrentaba en estos mismos organismos con una oposición abierta a que fuera llevado a la práctica.

Tampoco la burguesía democrática pudo ser integrada. Esta, desde el primer momento, fue consciente de las ventajas que el proyecto gubernamental le aportaba, y algunos de sus portavoces no dejaron de manifestarlo abiertamente. La reforma de la dictadura significaba la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, de organizarse ella misma más sólidamente, y permitir que la socialdemocracia cobrara fuerza, mientras que el PCE y las organizaciones de la extrema izquierda continuaban en la ilegalidad. Pero la burguesía democrática no podía comprometerse abierta y activamente con este proyecto. Si lo hacía, corría el riesgo justamente de perder toda posibilidad de legitimar su carácter "democrático" a los ojos del movimiento de masas. El terreno de su actividad debía centrarse en imponer en torno a su propio programa, un pacto a las organizaciones obreras, intentando restar protagonismo al movimiento de masas, y preparando las condiciones para obligar a los partidos obreros tradicionales a imponer un "pacto social" al movimiento obrero que permitiera evitar la transformación del final de la dictadura en el inicio de la revolución, que concediera un margen de maniobra al capital para reconstruir el Estado burgués, que asegurara, en definitiva, el tiempo necesario para solucionar la crisis del capitalismo español.

Pero fue sobre todo el movimiento de masas quien echó por tierra e hizo fracasar estrepitosamente los proyectos del primer gobierno de la monarquía. Tras la muerte de Franco, el movimiento de masas, con la clase obrera al frente, ha protagonizado las mayores movilizaciones de los últimos cuarenta años. Y en ese proceso, la huelga general de Vitoria, el violento enfrentamiento masivo con las fuerzas represivas, la huelga general de solidaridad en Euskadi (un millón de personas), las manifestaciones de solidaridad en todo el Estado, constituyeron el punto final al proyecto del gobierno, la

prueba práctica de la imposibilidad de "anticiparse" a la acción de las masas.

El movimiento de masas (I)

El actual movimiento de masas nació marcado por unas características originales que han definido su desarrollo desde el principio de los años 60 y han forjado su capacidad de resistencia y de ofensiva frente a la dictadura. Hoy esas características siguen configurando el último salto al franquismo y contienen la clave de la futura actividad de las masas.

El profundo carácter unitario del movimiento de masas ha sido determinado, por una parte, por el papel protagonista, de fuerza matriz, que el proletariado industrial ha asumido en el combate contra la dictadura y la explotación, de modo que los demás sectores explotados y oprimidos han entrado en acción a través de las brechas abiertas en la coraza franquista por las luchas obreras; y por otra parte, por la claridad con que ha aparecido ante los trabajadores y el pueblo la existencia de un enemigo común: la dictadura. Una inmensa aspiración a la unidad en la acción y a la solidaridad activa ha estado presente en todas las movilizaciones obreras y populares, desde las huelgas mineras del 62 hasta la Huelga General de Vitoria.

Hoy, esa aspiración se ha convertido en un dato determinante de la situación: una política comunista no puede plantearse al margen, y menos aún en contra suya.

La desigualdad en la experiencia y en la conciencia de las masas, ha sido un producto, en primer lugar, de las condiciones objetivas en que se ha constituido la clase obrera en la posguerra, la reestructuración social acelerada que originó en el país el desarrollo capitalista a partir de 1959 y sus efectos en la cuestión nacional y los desequilibrios regionales; en segundo lugar, de la ilegalidad impuesta por la dictadura a la organización de los trabajadores, que hizo imposible la existencia de organizaciones estables de masas, dificultando la acumulación y la transmisión de experiencias realizadas por el movimiento; en tercer lugar, de las ilusiones reformistas vehiculizadas por la práctica del PCE, principal obstáculo subjetivo para la superación de esta desigualdad, para la realización de luchas de conjunto bajo dirección proletaria, que se resumen hoy en la Huelga General contra la monarquía franquista.

El nuevo ascenso del movimiento de masas tras la muerte del dictador, la incorporación a la lucha de la inmensa mayoría de los trabajadores y sectores populares, la continuidad que han adquirido estas luchas, la imposición de un cierto margen de legalidad a la dictadura, la experiencia de luchas generales de carácter político (amnistía...) y de luchas reivindicativas sectoriales a escala de Estado (Banca, Telefónica, Sanidad, Enseñanza...) o de región (Construcción, Metal, Textil...) etc., han modificado esta desigualdad en un doble sentido: por una parte, extendiendo los límites inferior y superior de la actividad de las masas, en la que a

parecen niveles muy elementales de organización y conciencia (huelgas "legales" y manifestaciones con aplausos a la policía, formas organizativas estrictamente legales...) y niveles muy superiores a los hasta ahora conocidos (huelgas dirigidas por Asambleas o Coordinadoras de delegados, Huelga General de Vitoria, manifestaciones masivas por la amnistía y la disolución de los cuerpos represivos...); por otra parte, se está produciendo un desplazamiento "hacia la izquierda" del conjunto de la actividad de las masas, que eleva su nivel medio político y organizativo.

La desorganización, la "atomización" de los trabajadores, ha sido la función política fundamental de la dictadura franquista. Durante años, sólo en los momentos más elevados de las luchas más radicales, el movimiento de masas encontró su forma organizativa directa: la Asamblea. En estas condiciones, el movimiento obrero segregó el tipo de organismo para su vanguardia más adecuada para su situación de ilegalidad: Comisiones Obreras (CCOO).

Así, la dictadura, a la vez que impide la organización estable de las masas, estimula su instinto de autoorganización, aunque éste sólo pueda materializarse de forma puntual y discontinua, con un contenido diverso, desde las Asambleas "pasivas", a las Asambleas como centro de decisión..., concentrando especialmente en los grandes centros industriales con mayor tradición de lucha, menos frecuente en sectores de trabajadores más dispersos o ajenos a esa "escuela de organización" que es para los obreros la fábrica capitalista.

Estas condiciones explican el tipo de desarrollo que ha tenido la amplísima voluntad de organización con que el movimiento de masas ha saludado la desaparición del dictador, en el cual se han combinado íntimamente dos procesos organizativos de distinto contenido político:

— Por una parte, una firme aspiración a reconstruir las organizaciones de masas "naturales" en la sociedad capitalista: en especial el Sindicato; también organizaciones populares de barrios, organizaciones sectoriales (mujer, juventud...), etc.

— Por otra parte, una búsqueda de formas de autoorganización, basadas en el ejercicio directo de la democracia obrera, capaces de acoger en su seno a la clase obrera y a todos los sectores populares en lucha, que concentre toda su autoridad en la base, que se considere capaz de responder a cualquier tipo de problema social, político, económico: los Comités de Vigilancia de precios aparecidos en algunos barrios, los Comités de Investigación sobre crímenes franquistas que han apuntado en algunas zonas de Euzkadi..., responden desde temas particulares a este proceso; la tendencia a dar soportes organizativos a la solidaridad y las luchas de conjunto, que se ha mostrado, por ejemplo, en las pasadas luchas de la enseñanza en Madrid, va en el mismo sentido; y, sobre todo, la extensión de las experiencias de coordinación de delegados de Asamblea, la gran adquisición de las luchas desde principios de año, sirven de compro-

bación de la profundidad de esta voluntad de autoorganización.

Lo más importante es comprender que ambos procesos no se excluyen mutuamente, sino que aparecen juntos en la práctica, dentro de ese gran ensayo general para la recomposición orgánica del movimiento de masas que estamos viviendo. La conquista de la legalidad del movimiento supondrá un desarrollo combinado de ambos procesos, de modo que, en particular, la construcción sindical tendrá un fuerte contenido de autoorganización en sí misma y coexistirá con experiencias de autoorganización directa en las fábricas, los barrios, etc.

La contradicción entre el nivel de combatividad y el de conciencia política, ha sido otra de las características fundamentales del movimiento de masas. Los trabajadores han hecho repetidamente la experiencia de tener que realizar batallas prolongadas, durísimas, para obtener reivindicaciones mínimas; han desarrollado así una inagotable voluntad de combate, un profundo odio a la dictadura, una inmensa ansia de libertad. El movimiento de masas ha adquirido un instinto de clase anticapitalista muy desarrollado, pero su conciencia no ha podido recoger aún con claridad la experiencia de las luchas conscientes y directas contra la burguesía, en todas sus variantes políticas. El franquismo ha actuado a la vez de estímulo a la politización del movimiento — que ha debido afrontar a los instrumentos represivos de la dictadura —, y de pantalla respecto al contenido anticapitalista de su actividad.

Tras la desaparición del dictador, las masas han entrado en un proceso acelerado de politización, quieren ser políticamente activas, han visto la libertad al alcance de la mano y se han lanzado hacia ella, despertando todas las reivindicaciones, todas las "cuentas pendientes" de 40 años de explotación y opresión. Sin duda, sus "ilusiones democráticas" no sólo se han mantenido, sino que se han extendido, pero están sometidas permanentemente a la prueba de la acción. La actitud con que el movimiento de masas ha abordado la "tolerancia" gubernamental es ejemplar en este sentido: comprendiendo que la decapitación de la dictadura ofrecía posibilidades inéditas de utilización de la legalidad y de imposición de una "legalidad" de hecho, más allá de los códigos franquistas, los trabajadores — guiándose por criterios de eficacia para la acción, y sin rendir culto ni a la legalidad ni a la ilegalidad —, utilizaron ampliamente las CUD (Candidaturas Unitarias Democráticas, triunfadoras en las últimas Elecciones Sindicales, e impulsadas fundamentalmente por CCOO, INPRECOR) y las Asociaciones de vecinos..., y organismos semilegales diversos, especialmente de carácter antirrepresivo, manteniendo siempre la Asamblea en el centro de su organización. En cuanto se comprobó la estrechez de la "tolerancia" y, pese al legalismo y la moderación general de las direcciones obreras mayoritarias, el movimiento desarrolló de un modo fulminante las consignas apropiadas (disolución de los cuerpos represivos, responsabilidades por los crímenes del franquismo, amnistía laboral...) y los organismos coherentes (delegados) con la nueva experiencia.

Así, como ocurre siempre en los ascensos impetuosos de las masas, la conciencia de clase ha empezado a ser "el factor más dinámico de la situación"; saltos adelante en la situación de las masas que en condiciones normales hubieran tardado años en producirse, se dan ahora en unos días.

La debilidad de la hegemonía del PCE es un dato que resume — en el plano político y en sus dos aspectos, "hegemonía" y "debilidad"— todas las características anteriores. La incapacidad esencial de la socialdemocracia histórica para desempeñar el papel político en condiciones de clandestinidad, permitió al PCE ocupar sin competencia el papel político del reformismo, basando en ello su hegemonía en el movimiento de masas. Pero toda la dinámica objetiva de las luchas ha entrado repetidamente en contradicción práctica con la línea pacifista y conservadora del PCE, dentro de la cual la actividad de las masas tenía una función exclusiva de presión. De este modo, con cierta frecuencia, se han producido desbordamientos masivos de la dirección reformista y han surgido movilizaciones que desde el primer momento se escapaban a su control (especialmente en Euzkadi). Estos hechos expresan como, en competencia con esa hegemonía reformista, posiciones revolucionarias — más o menos consecuentes con una línea de independencia de clase — han encontrado una audiencia de masas y han podido disputar en la práctica, y muchas veces ganar, la dirección del movimiento al PCE. Sin duda, estos desbordamientos no han tenido un carácter irrecuperable, no han supuesto ninguna ruptura política de las masas con el reformismo, pero han significado una acumulación de experiencias, de adquisiciones del movimiento, en las cuales residen las posibilidades existentes de plantear abiertamente la batalla al reformismo por la dirección de la movilización de las masas.

Esta generalización del movimiento, cuya primera fase estamos conociendo, supone ya, y supondrá más — aún en un futuro inmediato, el crecimiento de las organizaciones tradicionales, no sólo el PCE, sino también, especialmente, el PSOE. Pero este crecimiento no ahogará las posibilidades de los revolucionarios, que recogerán ampliamente los frutos de ese "desplazamiento a la izquierda" de la actividad de las masas a que nos hemos referido antes.

La hegemonía del PCE se verá contestada desde la socialdemocracia y desde la extrema izquierda; paralelamente, su línea política sufrirá los efectos de tener que realizar simultáneamente concesiones a la burguesía y a los trabajadores.

Las relaciones de fuerza dentro del conjunto del movimiento de masas adquirirá una movilidad extrema que se reflejará en procesos de recomposición y crisis internas en las diversas corrientes políticas.

Este conjunto de características actúan dentro del movimiento como un sistema de fuerzas, cuya resultante modificará su dirección según el curso concreto de los acontecimientos, pero manteniendo un sentido fundamental: la polarización clasista de la sociedad española.

Suárez, un Gobierno de transición

El gran capital ha tomado clara conciencia del fracaso del proyecto de "reforma de la dictadura". Desde el momento mismo de su formación, el segundo gobierno del rey Juan Carlos afirmará públicamente su transitoriedad. El gobierno Suárez carece por completo de un programa que dé respuesta a los problemas claves del capitalismo español. Todo su qué hacer está dirigido a propiciar un desgaste progresivo de la relación de fuerzas social, que permita a la burguesía encontrar la posibilidad de dar paso a una nueva estabilidad política basada en la democracia cristiana y en la socialdemocracia. Este ha sido el sentido de todas las iniciativas emprendidas hasta el momento:

- El intento de desmasificar el tema amnistía y, sobre todo, de quitarle su contenido de conquista instantánea. La amnistía ha alcanzado a la casi totalidad de los militantes del PCE que estaban en prisión. Pero numerosos militantes de ETA y de LCR-ETA VI, militantes vascos en su inmensa mayoría, continúan en las cárceles franquistas, e incluso han visto endurecidas sus condiciones de vida en el interior de las mismas. El objetivo fundamental del gobierno es que el movimiento de masas acepte, también en este terreno, una evolución por etapas. Aún lamentándose sensatamente de los límites del alcance de esta amnistía, una parte importante de la prensa — aparentemente "independiente" — no ha dudado en afirmar que, "concedida la amnistía", los problemas fundamentales se desplazan a otros temas políticos. El propio Felipe González, secretario general del PSOE, ha dado su contribución a la orientación del gobierno, explicando que la amnistía total sólo será posible con el "gobierno provisional".

- Acelerar la división en el movimiento obrero en favor de la socialdemocracia, mediante la negociación directa y privilegiada con ella. Bajo la apariencia formal de simples cambios de impresiones, las reuniones del Presidente del Gobierno con dirigentes socialistas y, sobre todo, con el propio Felipe González, persiguen este objetivo.

- Mantener el "principio" de la ilegalidad del PCE, no porque considere que esa ilegalidad sea realmente un principio, sino buscando obtener la seguridad de mayores concesiones y, sobre todo, la garantía del establecimiento del "pacto social" por parte del partido obrero hegemónico.

- Reducir la "tolerancia" en cuanto a la actividad de las masas: ampliación mínima de la actividad legal controlable, combinándolo con una mayor rigidez de intervención contra la que resulta incontrolable; represión sistemática de las acciones en la calle; organización o paraorganización de actividades de provocación; aumento de la represión sobre los temas que son "no negociables": Monarquía, Ejército, piquetes de huelguistas...

En el terreno económico, la actividad gubernamental se reduce también a la toma de medidas tácticas. De un lado, poner directamente en manos del gran capital

la dirección de la política económica. De otro, retrasar cualquier medida de estabilización hasta después de que se hayan celebrado las Elecciones Generales y pueda existir una mayor "confianza política" del movimiento de masas. Si se tiene en cuenta que las cotas de inflación superarán este año los porcentajes de todos los anteriores, que el problema del desempleo — casi un millón de desempleados a fines del pasado año — no ha sido abordado, que el capitalismo español se encuentre lejos aún de poder sumarse a la relativa reactivación económica iniciada en Europa, que las entradas de divisas han disminuido considerablemente, etc., esto significa que el Gobierno se enfrenta con un durísimo clima social para el próximo otoño e invierno, en que los Convenios Colectivos deben renovarse.



Qué hacer...?



La oposición democrática: ampliar el "Pacto"

Resulta significativo que la formación de Coordinación Democrática (CD), "superando" la división anterior entre la Junta y la Convergencia (2), se sitúe inmediatamente después de los acontecimientos de Vitoria. La burguesía democrática buscaba con ello datarse de un organismo que pudiera cumplir, realmente, la función de pactar con el gobierno la "transición pacífica", el abandono definitivo de la dictadura. Por eso mismo, el objetivo fundamental con que nació CD fue el de existir simplemente para realizar este pacto. De su programa se hallaban excluidas las iniciativas de movilización de masas, incluso las movilizaciones reducidas y contro-

ladas. Pero la enorme presión de la lucha social impidió a CD mantenerse totalmente encerrada en esta posición; si no daba respuesta a las exigencias del movimiento y, en particular, si permanecía totalmente inactiva ante el problema de los presos políticos, CD corría el riesgo de perder su credibilidad a los ojos de las masas. Esto la llevó a convocar una semana proamnistía a comienzos de verano. Pero si esperaba poder controlar las manifestaciones, se equivocó totalmente. En cada provincia, en cada ciudad, a lo largo y ancho de todo el Estado español, decenas de miles de personas salieron a la calle, enfrentándose la mayoría de las veces a las fuerzas represivas, combinando las consignas de amnistía con las de disolución de los cuerpos represivos y la exigencia de responsabilidades por los crímenes de la dictadura.

Este desbordamiento abierto de la "semana amnistía" y el efecto en sus filas de las maniobras del nuevo gobierno, han remodelado la actividad de la oposición democrática, la han llevado a dar un nuevo paso a la derecha en su orientación:

— Adaptándose a la "transformación por etapas" del gobierno Suárez, la oposición ha comenzado a teorizar una política de conquistas parciales; conquistas que, por otra parte, en la mayoría de los casos no son más que promesas. La "ruptura democrática" y el Gobierno Provisional, hasta ahora ejes de su orientación, han dado paso a la teorización de un "Gobierno de amplia representación" o "Gobierno de amplio consenso democrático", que sirva para "preparar" las Elecciones Generales.

— Búsqueda de nuevos marcos de pacto, en donde el PCE continúe, pero con un peso inferior al que tiene dentro de CD, y que sean, sobre todo, marcos exclusivos de pacto, sin ninguna pretensión respecto a movilizaciones. Los recientes "documentos de los 32 y de los 44", la "Cena de Aravaca" (3), etc., han sido otras tantas formas de preparar marcos más amplios de pacto hacia la derecha burguesa — de lo que hoy constituye CD, marcos de pacto que rebajen el ya exiguo programa de este organismo.

— De este modo, el papel de CD debe continuar siendo principalmente el de existir simplemente. Es sintomático que, precisamente después del éxito de la semana Amnistía, se haya comenzado a insistir más en que CD "hace aguas" (Tamames, representante del PCE en CD). En realidad, incluso las movilizaciones controladas, limitadas, etc., resultan poco compatibles con los proyectos negociadores, cuando ambas cosas se pretenden hacer desde el mismo organismo. De manera cada vez más clara, CD es un símbolo (en donde la oposición burguesa se halla junto a los dos principales partidos obreros), y tanto la Democracia Cristiana como el PSOE realizan en ella tan sólo una pequeña parte de su política. Su mantenimiento corresponde únicamente a la necesidad de conservar las ilusiones del movimiento de masas en un organismo de pacto y en tratar de limitar la actividad de las masas a los límites fijados por el pacto interclasista. El PCE y las tres organizaciones maoístas que forman parte de CD tienen como función principal transmitir esta política pactista al movimiento de masas.

— En definitiva, la oposición democrática trata de establecer un marco político que permita un control estricto del paso de la dictadura a la democracia: los intentos — por concretar planes de gobierno, la elaboración de "gabinetes en la sombra" (dejando huecos suficientes para los sectores del régimen dispuestos a pactar), todo ello se halla orientado a convencer al gran capital y al ejército de la posibilidad de "dar el paso" sin que ello suponga el estallido definitivo de la crisis social. La actitud del propio PCE en relación a las bases militares — de los Estados Unidos en el Estado español, afirmando, por boca de Santiago Carrillo, que su partido no exige su desmantelamiento por el nuevo Estado democrático —, tiene por objetivo el ganarse esa confianza.

Nuestra alternativa

Ante el movimiento de masas se plantea una pregunta central: qué más es preciso hacer para acabar con la dictadura? La clase obrera, y con ella todos los sectores oprimidos, se han lanzado repetidas veces a la lucha, han protagonizado constantes experiencias de huelgas generales, han ocupado la calle, han utilizado todas las formas de lucha, legales e ilegales, que tenían al alcance de la mano. Pero la dictadura no ha sido aún derrocada. Los partidos obreros mayoritarios se niegan a dar una respuesta política de acción de masas a esta pregunta. Su política pactista exige la subordinación del movimiento a los programas y proyectos de la burguesía.

Para nosotros, cuatro elementos configuran la respuesta, cuatro elementos definen la alternativa política a la situación actual: la batalla por las elecciones inmediatas y por sufragio universal a una Asamblea Constituyente; la batalla por la formación de Asambleas Nacionales que permitan la autodeterminación inmediata de las nacionalidades oprimidas; la movilización por llevar "hasta el final" el derrocamiento del franquismo; y recorriéndolo todo ello, combinándose con el conjunto de las reivindicaciones sociales de las masas, la batalla por la organización de la huelga general.

ELECCIONES INMEDIATAS A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE I

La negativa del gobierno a legalizar al conjunto del movimiento de masas y a los partidos obreros, la actitud conciliadora de la oposición democrática, buscando un "período" constituyente bajo control de un Estado fuerte, con límites importantes al pleno ejercicio de las libertades democráticas, suponen la negativa de todos ellos a enfrentarse a unas elecciones inmediatas democráticas en las que (aún con todos los límites y deformaciones que tienen por sí mismas en el reflejo de las relaciones de fuerzas entre las clases) el peso protagonista del movimiento de masas se expresaría en la conquista de claras posiciones de fuerza para las organizaciones obreras.

Pero el movimiento de masas posee hoy la fuerza suficiente para echar por tierra todos los planes de la burguesía.



La convocatoria inmediata a la Constituyente — significa la legalización de todas las organizaciones políticas y sindicales, el pleno ejercicio de las libertades democráticas, en definitiva, el final de la dictadura. — Por eso mismo constituye hoy la consigna política central para impulsar la actividad de masas contra el régimen franquista y para enfrentarse a cualquier maniobra que, "en nombre de la democracia o del consenso democrático", aplaque el derecho del movimiento a dotarse de la constitución y del gobierno que él mismo elija.

Unida a esta batalla, la puesta en pie de la consigna "Por la República", ha de servir para que el movimiento de masas haga frente a los intentos — aceptados por la oposición democrática y por los partidos obreros hegemónicos — de mantener la monarquía como garantía de estabilidad del régimen burgués.

AUTODETERMINACION I ASAMBLEAS NACIONALES I

La cuestión nacional se ha convertido en uno de los temas más agudos de la lucha de clases en el Estado español. La crisis social global que constituye la característica esencial de la actual situación, ha creado una creciente oleada de radicalización contra uno de los elementos esenciales de la dictadura franquista: el ultracentralismo, la feroz represión contra cualquier forma de expresión de las nacionalidades. El Gobierno actual se ha visto obligado a congelar el proyecto de "regionalización" iniciado por Fraga, consciente de que sólo servía para agudizar la lucha de las nacionalidades oprimidas. Manteniendo la unidad nacional "por encima de todo" y negándose a cualquier "negociación" en este terreno, trata de buscar soluciones de compromiso con la burguesía "democrática" de las nacionalidades, de forma que ésta se comprometa a defender proyectos aceptables que integren la actual sensibilidad de las masas. Este ha sido el objetivo esencial de los contactos entre el Gobierno y la oposición democrática catalana.

Por su parte, los partidos obreros reformistas multiplian sus iniciativas para buscar fórmulas de pacto satisfactorias para la burguesía "democrática" de las nacionalidades, y que eviten la asunción revolucionaria de la lucha contra la opresión nacional en manos del proletariado. El marco político general de esta política se concentra en la consigna de los "Estatutos de Autonomía", concedidos durante la Segunda República, Estatutos que significaban una dependencia respecto a las decisiones de las Cortes centrales y que implicaban la negativa absoluta al ejercicio del derecho a la autodeterminación en las nacionalidades oprimidas. La formación del "Consell de Forces Polítiques" en Cataluña (4), en donde se agrupan solamente partidos burgueses y el propio PCE, el apoyo al Gobierno Vasco (cuya fundamental fuerza es el Partido Nacionalista Vasco) en Euzkadi, son las vías concretas por las que el PCE pretende integrar la radicalización de las nacionalidades oprimidas tras sus proyectos interclasistas.

Frente a todo ello, los marxistas revolucionarios afirmamos el derecho soberano de los pueblos catalán, vasco y gallego a decidir ellos mismos las relaciones que desean mantener con el resto del Estado español y a respetar totalmente esa decisión, incluso si fuera la de separarse y formar un Estado independiente. Ciertamente, nosotros pensamos que en la situación histórica actual, la separación no constituye la alternativa más adecuada para los intereses del proletariado y del pueblo vasco de esas nacionalidades. Creamos que, en las actuales circunstancias, el marco más adecuado es el de una República Federal de todas las nacionalidades y regiones que actualmente están sometidas al Estado español. Pero afirmamos el derecho de todas estas nacionalidades a separarse; defendemos como un principio inalienable el inmediato ejercicio del derecho a la autodeterminación en todas ellas. Por eso rechazamos cualquier otra medida que deje de lado este derecho. Ni la

Asamblea Constituyente central, ni los "Gobiernos Provisionales" impuestos a las masas vascas, gallegas, catalanas, son una solución política real a la opresión nacional, ni tienen derecho alguno a interferir o controlar la autodeterminación nacional. La consigna de Elección por sufragio universal de la Asamblea Nacional soberana en cada una de las nacionalidades, que garantiza la autodeterminación nacional, tiene como objetivo responder a este problema.

LLEVAR HASTA EL FINAL EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA I

Un solo virus puede infectar de nuevo todo el país. Esta es una idea repetida constantemente en nuestra agitación. La burguesía pretende apoyarse en una parte sustancial de la dictadura para reconstruir el nuevo Estado "democrático". La dictadura ha constituido la forma específica que ha adoptado el Estado burgués durante 40 años. Su total desmantelamiento constituye un peligro real para el poder de clase del capitalismo. Pero el movimiento de masas no puede aceptar que quienes defiendan y garanticen las libertades democráticas que él conquistara, sean los mismos fusiles que asesinaron hace meses de un año a cinco revolucionarios, ni los mismos cuerpos represivos que han masacrado cada manifestación, cada movilización. La disolución de los cuerpos represivos y de toda la legislación franquista, la exigencia de responsabilidades por todos los crímenes de la dictadura, constituyen objetivos que el movimiento de masas no puede abandonar. Además, los cuerpos represivos constituyen la materia prima desde la cual se organizan y se llevan a cabo los atentados fascistas. Desde Montejurra, hasta el secuestro y previsible asesinato del militante de ETA V "Pertur", pasando por el asesinato de Normy Menchaca en Sanjurjo (5), por los atentados en el barrio "del Antiguo", en San Sebastián, la voladura del club juvenil del barrio de Usera en Madrid y un largo etcétera, han sido los componentes de las propias fuerzas represivas, sobre todo de la BPS y de la Guardia Civil, quienes se han constituido en comandos fascistas. La lucha contra todo ello debe ser preparada desde ahora. Los Comités de Investigación por el crimen de Sanjurjo, por el secuestro de Pertur, los Comités de Vigilancia Antifascista que han comenzado a ponerse en pie, son los instrumentos de lucha y de organización para llevar adelante esta batalla hoy, y para asegurar mañana el combate por la total destrucción de la dictadura asesina.

ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL I

La perspectiva de la huelga general y su utilización como consigna central en momentos como el actual responde a cuatro objetivos:

- Unificar las consignas políticas centrales con las reivindicaciones económicas y sociales de las masas, centralizando en un mismo combate la lucha por el derrocamiento de la dictadura y la movilización anticapitalista.
- Desarrollar la centralización de los organismos de los que se dotan las masas para las luchas, desde CCOO



Hace 40 años...

y los partidos obreros hasta los Comités de Huelga de empresa;

— Hacer vivo, consciente, en la actividad del movimiento de masas, su propio protagonismo en el derrocamiento de la dictadura, combatiendo las tentativas de la burguesía democrática y de los partidos reformistas de hacer aparecer la conquista de la democracia como un resultado de su política pactista.

— Cortar la hierba bajo los pies a la política de "conquistas parciales" adoptada por la oposición democrática, situar en el centro de la actividad de las masas la necesidad de derrocar la dictadura.



Un otoño decisivo

En la situación política del Estado español, las batallas de los próximos meses van a tener un papel decisivo. En ellas el movimiento de masas tendrá la ocasión de acabar definitivamente con la dictadura.

Las negociaciones reivindicativas

Las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno significan que el movimiento de masas se verá confrontado a una extraordinaria dureza de la patronal, a la amenaza del desempleo y a la represión, junto a las cuales la burguesía pretenderá acentuar la división sindical.

Frente a ello, la clase obrera sólo puede triunfar reforzando las armas que ha puesto en pie a lo largo de los primeros meses de este año: las luchas de conjunto, las plataformas reivindicativas unitarias, las asambleas delegadas de las mismas para la negociación y la huelga.

El desmoronamiento de la CNS ha llegado ya a tales extremos, que la propia patronal considera que ha dejado de ser un elemento útil para la negociación de los Convenios Colectivos. Intentar basar únicamente en las estructuras de enlaces sindicales combativos la organización de la lucha reivindicativa, constituiría un gra-

ve error. Para impulsar la autoorganización y la lucha unitaria, es necesaria una coordinación, una actividad unitaria real entre CCOO, UGT, USO y los demás organismos sindicales. La tarea de esta coordinación ha de ser el compromiso a impulsar la coordinación de los organismos representativos de las asambleas de base, de forma que la clase obrera pueda hacer frente a todas las maniobras de la burguesía y pueda dotarse de instrumentos unitarios para dirigir su lucha reivindicativa.

La unidad sindical

Mientras que la dirección de UGT mantiene sus posiciones divisionistas en el terreno sindical, la corriente mayoritaria de CCOO — el PCE — continúa siendo una forma organizada estable a las mismas a nivel de las empresas y ramos, continúa reduciendo la actividad de las CCOO a la realizada por los estrechos aparatos de dirección que las controlan. Ello pone en peligro real la unidad sindical, tan profundamente sentida por la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país. Todos los proyectos tendentes a lograr esa unidad se quedan reducidos a los límites fijados por los acuerdos entre las burocracias de CCOO y UGT. También en este terreno las organizaciones obreras reformistas intentan arrebatarse a las masas su protagonismo, evitar su papel activo en la construcción unitaria del sindicato.

Frente a todas esas maniobras, la batalla por un Sindicato Único nacido de un Congreso Sindical Constituyente y que parta de las asambleas de fábrica y de tajo, debe continuar siendo el eje central de la alternativa sindical de los marxistas revolucionarios. Pero la materialización práctica de ese Congreso Sindical no es posible antes de la conquista de la legalidad para el conjunto del movimiento obrero. Y eso plantea la necesidad de dar respuestas tácticas concretas a la situación actual.

El primer eje de esta táctica estriba en la necesidad de que CCOO adopte una forma sindical organizada estable, desde las empresas hasta los órganos directivos, que permita la actividad efectiva de los millares de trabajadores que se reconocen en ellas y evite su sustitución por la burocracia dirigente. Así, el combate por una organización democrática del Congreso General de CCOO, que se decidió celebrar en la Asamblea General de la pasada primavera, ha de ser la ocasión para que CCOO adopte una estructura organizativa sindical estable y centralizada, democráticamente elegida desde la base hasta la dirección. Junto con ello, la batalla por la conquista de la legalidad de CCOO ha de situarse en el centro de la actividad revolucionaria: impulso de la organización de venta abierta de boletines de CCOO a todos los niveles, apertura de locales sindicales de CCOO, etc.

Preparar desde ahora las condiciones para el futuro Sindicato Único, y dotarse de los instrumentos adecuados a nivel de empresa para la negociación reivindicativa, exige combinar esta batalla con el impulso de la formación de sindicatos únicos de empresa, que agrupen a todas las corrientes sindicales que existen en su interior.

La lucha por la Amnistía

Los proyectos del Gobierno tendentes a desviar la atención de las masas del tema de la amnistía no han tenido éxito. Particularmente en Euskadi, la voluntad de las masas por continuar el combate hasta que no quede un sólo preso político o un sólo exiliado, se mantiene totalmente en pie. Pero es preciso redoblar la lucha en unos momentos en que la relación de fuerzas con que cuenta el movimiento de masas puede, en este terreno más que en ningún otro, obtener una victoria total.

Pero además, la ampliación de la batalla por la amnistía al terreno laboral, cuyo precedente más alto lo marcaron los 250 000 manifestantes de Bilbao, permite y exige que esta consigna se sitúe en el centro mismo de las negociaciones reivindicativas de la clase obrera. En numerosos bastiones obreros ya ha sido un hecho la amnistía para todos los despedidos por motivos políticos o sindicales desde 1936; hay que ampliar esas victorias y ganar la misma batalla en todos los sectores en donde la dictadura y la patronal arrojaran de sus puestos de trabajo a los obreros más combativos.

Contra el Referendum falso

Retrasado una y otra vez, sin fijar aún el contenido del mismo, el Gobierno anuncia el Referendum para finales de año.

Frente al mismo, la posición ha de ser unánime: Fuera el Referendum! Ninguna duda, ninguna vacilación en este terreno, mientras la amnistía no haya sido concedida, y mientras los partidos y organizaciones obreras continúen en la ilegalidad.

Pero el Referendum puede ser la ocasión para impulsar una movilización de masas unitaria tras objetivos políticos centrales:

Por las elecciones a la Constituyente!

Por la República!

Por la elección de Asambleas Nacionales soberanas en cada nacionalidad!

Es necesario unificar la respuesta obrera en torno a estas consignas, estructurar la unidad de acción de todos los partidos obreros y organizaciones sindicales.

Este es el "voto obrero" que hay que poner en pie frente a la farsa del Referendum de la Monarquía franquista!

Pedro Aguirre

31.8.1976

Notas (INPRECOR):

1. Este epígrafe reproduce íntegramente el apartado II de la Resolución Central aprobada en el Congreso, recientemente celebrado, de LCR-ETA(VI), cuyo título es "La línea general de la evolución del movimiento de masas".

2. Coordinación Democrática se creó el 29 de marzo de 1976, y está en la actualidad integrada por diversas per-

sonalidades y grupos burgueses (democracia cristiana), el PSOE y el PCE, y tres organizaciones maoístas (Partido del Trabajo de España, Movimiento Comunista de España y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, esta última recientemente incorporada). Su origen se sitúa en la fusión de los dos organismos de colaboración existentes anteriormente: Junta Democrática (creada en julio de 1974, y que agrupaba, en torno al PCE, a personalidades burguesas poco significativas y al PTE) y Plataforma de Convergencia Democrática (creada a su vez en junio de 1975, y que agrupaba, en torno al PSOE, a algunos grupos de la democracia cristiana y al MCE y la ORT).

3. Estos documentos se publicaron inmediatamente después de la declaración de Coordinación Democrática a raíz del decreto de Amnistía. En ellos aparecían como firmantes, aparte de los representantes burgueses que integran CD y los representantes del PSOE y del PCE, otros elementos burgueses que no forman parte de aquella, al tiempo que los grupos centristas-maoístas se hallaban excluidos. En tales documentos se hacía una crítica mucho más "matizada" de la política reformista del Gobierno. La "Cena de Aravaca" (5 de agosto) fue una reunión del mismo tipo (a la que no asistió el PSOE, ni, como en el caso anterior, los representantes de los grupos maoístas presentes en CD), en donde se sometió a discusión la formación de un organismo unitario de la oposición más "amplio" que la CD, y en donde se especuló sobre la formación de un gabinete ministerial en la sombra.

4. Organismo creado a principios de 1976, que integra únicamente a representantes de agrupaciones políticas burguesas junto con el PSUC (rama catalana del PCE). El Consell ha aparecido para la burguesía catalana y para el propio PCE como una alternativa a la Asamblea de Catalunya, de la que forman parte, además de algunas personalidades burguesas y el mismo PCE, diversos grupos de la extrema izquierda, y numerosas organizaciones de masas, de barrios, CCOO, etc, a fin de "integrar la radicalización" de las masas catalanas, y "superar" de esta forma el papel que ha jugado la Asamblea en las movilizaciones.

5. En Montejurra fueron asesinados dos participantes de la fiesta anual de los carlistas, seguidores de Víctor Hugo, y heridos numerosos de ellos. Los disparos de balacón fueron efectuados por presuntos partidarios de una corriente carlista integrista, y que en realidad no eran sino elementos integrantes de grupos fascistas y parapoliciales. La Guardia Civil, presente en toda la zona, no intervino en esta ocasión, aún y cuando la presencia de elementos armados ya había sido señalada el día anterior.

Pertur fue secuestrado en el País Vasco francés el día 23 de julio pasado por "elementos desconocidos" (pertenecientes lógicamente a grupos parapoliciales). Su paradero, o si ha sido asesinado, se desconoce todavía.

Normy Menchaca fue asesinada en julio de 1976 en el transcurso de una manifestación por la amnistía por dos individuos vestidos de paisano, que fueron reconocidos como Guardias Civiles.

Gran Bretaña



Amenaza racista

Andrew Jenkins

A principios de año, los medios oficiales se felicitaban por la satisfactoria evolución de las relaciones raciales en la Gran Bretaña. Alex Lyon, ministro responsable de la emigración y de las relaciones raciales, y un representante de la embajada pakistaní declararon entonces que "el país se halla en el camino de convertirse en una sociedad multirracial acabada, si se excluyen algunos problemas de orden secundario que quedan por resolver" (como el de la entrada de los asiáticos originarios de África oriental y que detentan pasaportes británicos, o el de los parientes de inmigrantes llegados antes de 1973). Tales concepciones se hallaban tan extendidas, que incluso un analista radical de las cuestiones racistas, como Siva Nundam, escribió que el capitalismo británico estaba renunciando al uso del racismo, y que había optado por la integración de la clase media negra. Esta afirmación se vio aparentemente confirmada cuando el demagogo racista Enoch Powell pronunció un solemne discurso acusando a los medios oficiales de publicar estadísticas falsas en las que minimizaban, de manera fraudulenta, la importancia de la inmigración negra: no obtuvo eco significativo alguno en la opinión pública. Sin embargo, seis meses más tarde, Alex Lyon había cesado en sus funciones, dos candidatos fascistas han resultado elegidos en los consejos municipales, la prensa conservadora alza por las nubes a un nacional-socialista que había anunciado su negativa a vender su casa a unos negros, tres estudiantes negros han sido asesinados, y se han registrado más de un millar de agresiones contra inmigrantes.

La política de inmigración

Tal intensificación de las actividades racistas no podía resultar nada sorprendente. El capitalismo británico se veía forzado, de manera cada vez más apremiante, a

modificar sus leyes sobre la emigración, así como la estructura de la población inmigrada. Desde los años 50, el capitalismo británico ha empleado trabajadores negros de la Commonwealth. Estos inmigrantes se instalaron en el país y obtuvieron legalmente todos los derechos civiles. Esto sitúa a los inmigrantes en la Gran Bretaña en una posición mucho más fuerte que en otros numerosos países de Europa Occidental, en donde, en general, los inmigrantes disfrutaban únicamente de contratos de trabajo por un periodo limitado. A partir de 1962, la clase dominante comenzó a limitar el derecho de entrada en el país a los ciudadanos negros de la Commonwealth. Estas medidas se vieron agravadas con el final del periodo de boom económico, y el abandono de la política imperialista del capitalismo británico en beneficio de una opción europea. Uno de los problemas más difíciles, heredado del anterior periodo, era la existencia de varias centenas de millares de negros que poseían pasaporte en donde se afirmaba que eran ciudadanos del Reino Unido y de las Colonias. Esto les daba, pues, el derecho a entrar en Gran Bretaña. El primer intento por modificar este derecho data de 1968. Entonces se adoptó un decreto, a iniciativa de James Callaghan, entonces ministro del Interior laborista, en el que se limitaba el derecho de entrada automática en el país únicamente a los poseedores de un pasaporte británico nacidos en el país, o de padre y abuelos nativos de Gran Bretaña. A partir de entonces, la plena ciudadanía británica depende del color de la piel. El decreto sobre la inmigración, adoptado por el gobierno conservador en 1971, prohibió el derecho a establecerse a los inmigrantes que habían entrado en el país con un contrato de trabajo de duración limitada. Estos se debían someter a un control policia-

Aceite sobre el fuego

Una de las razones que explican la sensibilidad de la clase obrera a la ofensiva racista, es el carácter extremadamente chauvinista de la tradición ideológica de la izquierda laborista. Esta había lanzado una campaña por el control de las entradas de mano de obra, a fin de "proteger el trabajo británico". Esta campaña facilitó la intervención de los fascistas en los sindicatos, explicando la necesidad de tomar otra medida lógica en defensa de los trabajadores británicos: la expulsión de los

inmigrados. Desgraciadamente, un sector de la burocracia sindical se ha embarcado en esta vía. La dirección del sindicato de los empleados de hoteles pidió al gobierno laborista la reducción del número de permisos de trabajo para los inmigrados, demanda que fue rápidamente satisfecha. En febrero de 1976 se supo que el Departamento de Empleo, dirigido entonces por el portavoz de la izquierda, Michel Foot, había publicado un memorándum según el cual los permisos de trabajo para los trabajadores extranjeros no serían renovados si existían trabajadores nacionales dispuestos a tomar este empleo. De lo cual se deducía que tales licenciamientos no se hallarían sujetos a ninguna apelación por licencia miento abusivo. El ejemplo quizás más grave de estas medidas se produjo a principios de junio, en la cresta de la oleada de histeria racista, cuando la dirección del sindicato de los empleados de la hotelería se dirigió al Ministro del Interior para reclamar el reforzamiento de las medidas de expulsión contra los inmigrantes "ilegales". Solicitó que "el decreto sobre la inmigración sea enmendado, a fin de forzar a toda persona que ofrezca un empleo potencial, a verificar si un trabajador extranjero en búsqueda de empleo tiene un permiso de trabajo en regla".

El último elemento que permite comprender la escalada del racismo nos reenvía al conjunto de las correlaciones de fuerzas entre las clases en Gran Bretaña. Gracias a la primera etapa del "contrato social", el Gobierno laborista ha registrado un éxito importante en el alza de la tasa de beneficio y en la baja del nivel de vida de la clase obrera. Los gastos sociales han sido reducidos, lo cual ha provocado el deterioro de las condiciones de educación, de alojamiento y de sanidad, en el mismo momento en que el paro se incrementaba. En una situación en la que la clase obrera, a causa del Gobierno laborista, y en alianza con casi toda la burocracia sindical (incluida la izquierda tradicional de Jack Jones y de Hughes Scanlon), ha sufrido varias derrotas, aunque estas no hayan sido decisivas, no resulta sorprendente que el racismo se haya desarrollado en el seno de la clase obrera. En ausencia de una contraofensiva frente a las medidas capitalistas, los trabajadores blancos se han hecho sensibles a la agitación racista, que responsabiliza a los negros de las colas que se producen ante las oficinas de desempleo y del hundimiento del Welfare State (conjunto de medidas concernientes a la seguridad en el empleo, al bienestar social, a los servicios de salud y de educación gratuitos, a la seguridad social, etc). El partido y la prensa conservadora han favorecido el desarrollo de los sentimientos racistas en la clase obrera, a fin de dividirla y debilitarla frente a los próximos ataques contra su nivel de vida, y a fin de preparar una victoria electoral del partido Tory, en la eventualidad de que el gobierno laborista halla acabado de cumplir con su papel. Un reciente estudio de Donley Studler muestra que los Tories (conservadores) aumentaron en un 6,7 % sus resultados electorales en 1970 gracias a que mantenían posiciones más duras contra la inmigración. Un informe de octubre de 1975 de la Comisión de las Relaciones Comunitarias muestra que los laboristas obtuvieron la mayoría en febrero y en octubre de 1975 únicamente gracias a los votos negros.



La clase dominante en tanto que tal (es decir, distinta de los intereses específicos del partido conservador) no desea un desarrollo ilimitado del racismo en la sociedad británica. Si los capitalistas están felices al ver a la clase obrera dividirse, no desean asistirla hoy al nacimiento de un movimiento racista organizado. La formación de un núcleo fascista —relativamente importante para la Gran Bretaña— hace más agudo este problema. Si un movimiento racista se escapase a su control, se produciría una reacción explosiva de los trabajadores negros. La política de la burguesía ha sido hasta ahora la de operar en un marco en el que combinaba la integración y la represión selectiva. El decreto racista sobre la inmigración de 1968 estaba compensado por el decreto sobre las relaciones raciales, adoptado en el mismo año, que hacía ilegal, en cierta medida, la discriminación racial. El actual proyecto de nuevo decreto sobre la nacionalidad británica, se halla combinado con la presentación al Parlamento de un proyecto de ley más severo sobre las relaciones raciales. Sin embargo, en el último período se ha puesto el acento sobre la represión selectiva. La policía ha sido regularmente enviada a la búsqueda de inmigrantes "ilegales" y ha hostigado a los jóvenes desempleados antillenses; de cuando en cuando, estas intervenciones policiales han estado a punto de provocar auténticas batallas campales.

El primer síntoma de las tensiones que actúan, bajo la superficie aparentemente en calma de las relaciones raciales en la Gran Bretaña, se puso de manifiesto cuando Callaghan sucedió a Wilson como dirigente del partido laborista, y al ser licenciado Alex Lyon. Este no apoyaba a la izquierda tradicional, sino que pertenecía a la vieja tradición "gaitskellista", que preconizaba una política liberal a propósito de la inmigración, y sentimental en lo que concierne al Imperio. Era evidente que Lyon deseaba detener la oleada de inmigrantes, pero al mismo tiempo también trataba de cumplir lo más rápida y humanitariamente posible los compromisos adquiridos frente a los 40 000 asiáticos de África oriental y los aproximadamente 100 000, entre mujeres e hijos de inmigrantes originarios del subcontinente indio e instalados en Gran Bretaña con anterioridad a 1963. Desde el año 1968 al año 1970, la media anual de nuevas inmi-

grados negros fue de 63 000 personas. Los conservadores, de 1970 a 1972, hicieron caer esa cifra a 45 000. En 1973, tras la puesta en práctica del decreto de 1971, esa cifra se fijó en 34 000 personas. Acelerando los trámites e incrementando las cuotas, Lyon hizo ascender esa cifra a 50 000 personas. Un sondeo realizado por el partido laborista entre los militantes sindicales de base demostró que estos consideraban la inmigración como la cuestión más importante frente a la inflación y el desempleo. La dimisión de Lyon fue considerada por los dirigentes de las comunidades inmigradas como una concesión a los racistas, en concordancia con la reputación de Callaghan como defensor de una línea dura en materia de inmigración. El mismo Lyon declaró: "He pagado el precio de mi voluntad de obtener justicia para los negros de este país. Jim (Callaghan) jamás dedicó mucho tiempo a quienes abrazaban esta causa". También declaró que los funcionarios, bajo la presión de las fuerzas racistas, habían hecho abortar estas reformas. Afirmó por otro lado que se había consagrado dinero al combate contra la pobreza de los negros ciudadanos, a fin de evitar la aparición de una situación "a la americana".

Comienza la ofensiva

A principios de mayo, los medios de comunicación de masas anunciaron que dos familias asiáticas expulsadas de Malawi, que no tenían alojamiento, habían sido albergadas en un hotel de lujo por un Consejo municipal de Sussex, con un costo de 600 libras por semana. Un vendaval de grandes titulares denunció que se preveía una nueva "invasión" masiva de asiáticos de Malawi. Los mas media denunciaron a los inmigrados como parásitos que trataban de entrar en Gran Bretaña para vivir de la seguridad social a expensas de los contribuyentes. Se produjo una explosión de sentimientos racistas. El High Sheriff (Comisario) conservador del Sussex, reclamó el establecimiento de un campo de tránsito en el Condado para los inmigrantes asiáticos sin alojamiento: hagámoslo tan incómodo como se pueda".

Powell entró en liza, estando como estaba ahora en condiciones de ganar audiencia. Anunció la circulación de un informe secreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, que había llegado a su poder por vías misteriosas, que revelaba la existencia de un importante tráfico de inmigrantes "ilegales", y que el número de parientes de inmigrados del subcontinente indio esperando su entrada era ilimitado. Declaró a los negros como responsables de los crímenes, de los conflictos sociales y de ataques cotidianos contra la policía. Declaró así mismo estar seriamente preocupado por las numerosas armas de fuego y explosivos "extendidos" entre los inmigrados. Si las cosas continuaban, "la Belfast de hoy nos podría parecer un lugar envidiable". La respuesta de Powell a esta perspectiva apocalíptica era la detención de toda nueva inmigración. Todos los sectores del partido conservador tanto la "izquierda" como la derecha, hicieron frente común para exigir un control más estricto de los inmigrantes con anterioridad a la concesión de un permiso de estancia, y que se decidieran restricciones a la en-

trada de sus familias. Los parlamentarios laboristas no hicieron menos. Bob Mellish, colaborador laborista de Wilson, exigió la prohibición total de la inmigración: "este país ha hecho todo lo que debía. Ha actuado con mucho honor e integridad, pero yo digo que 'demasiado es demasiado'". La respuesta de Callaghan a la ofensiva de Powell fue garantizar el reforzamiento del control de la inmigración.

Pero los acontecimientos más significativos se desarrollaban en la calle. En Londres, el 22 de mayo de 1976, dos estudiantes negros fueron asesinados a puñaladas. El 3 de junio, la embajada de Pakistán publicó un comunicado declarando que los ataques contra los inmigrantes y sus propiedades se habían convertido en "no excepcionales". El viernes 4 de junio, avanzada la noche, Gurdip Singh Chagger era apuñalado hasta la muerte en South Hall, un barrio de Londres en el que residen muchos asiáticos. Millares de estos se manifestaron entonces contra el asesinato. Organizaciones como el Movimiento de los Jóvenes Asiáticos de South Hall (South Hall Asian Youth Movement) y la Conferencia Socialista-Asiática (Asian Socialist Forum) comenzaron a dar una dirección a los asiáticos del barrio. Llamaron a la autodefensa del barrio y denunciaron la pasividad de los dirigentes negros "respetables". Los grupos de autodefensa se multiplicaron en diversos barrios, como por ejemplo en Blackburn y el East End de Londres.

El domingo 7 de junio se desarrolló una importante manifestación de asiáticos ante el puesto de policía de South Hall, que impuso la liberación de los jóvenes asiáticos detenidos al principio de la jornada. Proful Patel, un dirigente conservador indio, declaró: "Los dirigentes tradicionales asiáticos son rechazados por los jóvenes militantes... Si no aparecemos más activos, perdemos la débil influencia que aún conservamos". Los notables de la comunidad pusieron en pie un Comité de Acción Asiática (Asian Action Committee) que exigió a Callaghan la denuncia de los asesinatos y reclamó entre vistarse con él. Cuatro días después, el presidente del Comité, Shigbat Kadri, declaraba: "no hemos recibido ni siquiera una respuesta, lo que para nosotros ha supuesto un gran choque que nos aterroriza". Finalmente,



Calaghan se entrevistó con los dirigentes. Afirmó que continuaría, como antes, con su oposición al racismo, pero insistió en la denuncia de los grupos de vigilancia negros.

Los oficiales indios, pakistaníes y bengalíes recibieron una oleada de informes de agresiones racistas. En Barking, 8 asiáticos fueron rodeados por 150 blancos. La policía intervino y detuvo a 9 personas, de ellas 7 asiáticos. La novedad que se había producido en la situación era la voluntad de los trabajadores negros de salir a la calle. Esta voluntad se puso de manifiesto durante meses, en los que millares de negros participaron en manifestaciones antifascistas. El 23 de abril, en Bradford, millares de jóvenes negros se opusieron a una manifestación del Frente Nacional y a la policía que los protegía, en el momento en que éstos atravesaban un barrio negro de la ciudad. Se lanzaron ladrillos, y se volcaron varios coches de la policía. Después del asesinato de South Hall, la Conferencia Permanente de las Antillas (West Indian Standing Conference) decidió que se debían de poner en pie grupos de defensa comunitaria, para "oponerse a los atentados contra la vida de los negros". En Blackburn, en donde se contabilizan hasta 3 ó 4 agresiones por día, la Asociación de los Trabajadores Indios (Indian Workers Association) estudió el perímetro de defensa que podría establecerse en torno al barrio de inmigrantes. La capacidad de los negros para organizar la autodefensa enfrió considerablemente el ardor de los racistas "respetables" de la clase dirigente. Estos se deban cuenta del precio que podrían tener, que pagar atizando las tensiones racistas: la pérdida del control del centro de numerosas ciudades.

Los fascistas han ganado mucho con la escalada racista. A principios de año se hallaban hundidos en un relativo desarrollo. Se había producido una escisión en el Frente Nacional, la más importante organización fascista. La minoría fundó el Partido Nacional, que caracterizó al Frente como una organización antidemocrática, controlada por hitlerianos. El Frente Nacional, por su parte, denunció al Partido Nacional como una alianza entre agentes del partido Tory y neomarxistas. Ambas organizaciones son de hecho fascistas, aunque lo nieguen, porque el fascismo tiene connotaciones antipatrióticas en Gran Bretaña. Los dos grupos se presentaron a las elecciones municipales de mayo, obteniendo cerca de 900 000 votos, en unidad con otras pequeñas organizaciones.

En Blackburn, ciudad cuya industria textil se halla en declive, y en donde reside una amplia comunidad de inmigrantes, el Partido Nacional ha conseguido dos escaños en lo que, hasta ahora, había sido un coto cerrado de los laboristas. La media de votos recogida por los candidatos fascistas en esta ciudad se aproxima al 37%. Un portavoz del partido laborista comentó el acontecimiento declarando "que se hallaba inquieto por la victoria de los fascistas, pero que le preocupaba menos que si hubiera sido una victoria comunista". Estas victorias hacen de Blackburn una de las zonas en las que las agresiones fascistas son más graves. El 22 de mayo una manifestación antifascista tuvo que ser protegida por la

policía, armada con porras, frente a los ataques de los paseantes histéricos. En Bradford, otra ciudad textil, el Frente Nacional obtuvo buenos porcentajes en circunscripciones obreras, especialmente en la que se presentaba el alcalde. De manera significativa, la circunscripción en la que los jóvenes negros habían atacado la manifestación fascista, se produjo una evolución diferente de la media nacional: los laboristas ganaron sobre los torios.

En Leicester, el Frente Nacional obtuvo un 18,5% de los votos (los laboristas un 35,5%). Sus tanteos más significativos se produjeron en las circunscripciones dominadas por los laboristas, en donde se enfrentaron a personalidades de la derecha laborista, como por ejemplo dos antiguos alcaldes que, cuando ocupaban dicho cargo, habían publicado en los periódicos esteafrikanos comunicados en los que prevenían a los asiáticos de que no vinieran a Leicester. En una de las circunscripciones sólo faltaron 63 votos para que el Frente Nacional obtuviera un escaño. El dirigente laborista de Leicester, el reverendo Ken Middleton, deseó no ver en ello más que "una fase pasajera, un momento de aberración". Criticó a los miembros del partido laborista que participaban en las actividades de los fascistas. Sin embargo, allí en donde los fascistas habían sido activos se produjo un declive electoral del Frente Nacional. Desgraciadamente, el apoyo electoral al Frente Nacional no habrá sido sólo un momento pasajero. El 1 de julio, en el transcurso de una elección parcial en Londres, en una zona de fuerte implantación laborista, los Torios obtuvieron el 12% de los votos, el Frente Nacional un 18,5 el Partido Nacional un 26, y los laboristas un 43,5. La suma de los votos fascistas fue, pues, superior a la de los laboristas.

La repuesta del movimiento obrero

En el momento actual, la burguesía no puede apoyar seriamente a los fascistas, pero se ha demostrado que el racismo podía ser utilizado para dividir a la clase obrera, y favorecer avances electorales de los Torios, como ocurrió en las elecciones municipales de mayo. La respuesta del movimiento laborista a la escalada racista ha sido, o inadecuada, o perniciosa. El Gobierno laborista declaró hallarse estudiando la apertura de un registro de parientes de inmigrantes ya entrados en el país. Tal medida reforzaría inevitablemente los controles. Numerosos dirigentes locales del partido han pedido la prohibición de la inmigración. El Comité de Organización, sin embargo, ha lanzado una campaña antiracista. Pero resulta difícil averiguar lo que esta haya podido conseguir. El único llamamiento claro fue el que pedía a los miembros del partido laborista el que no participasen en las manifestaciones contra el Frente Nacional y otras organizaciones racistas. Fuera de esto, la izquierda laborista y sindical han guardado un prudente silencio sobre el problema de conjunto.

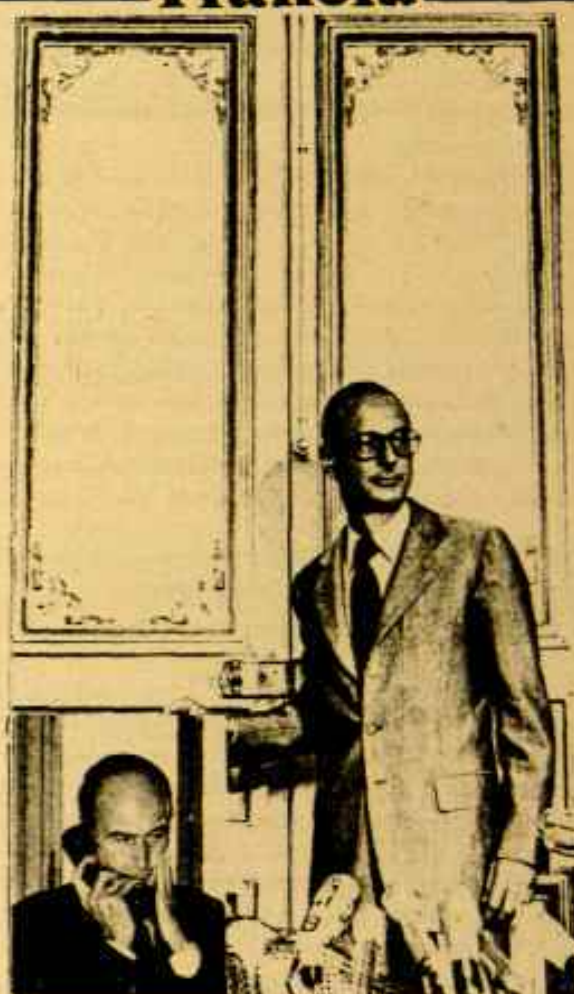
El Partido Comunista ha estado implicado en la organización de conferencias y marchas contra el racismo, pero su orientación política no era correcta. Evitó el a

ponerse claramente a toda regulación de la emigración. Su consigna central fue la de "Una raza, la raza humana", consigna que trata de entusiasmar a capas tan diversas como el clero progresista y los liberales moderados! El objetivo esencial del PC ha sido el reforzamiento del nuevo proyecto de ley sobre las relaciones raciales, con el fin de forzar de esta forma al Estado a poner el racismo fuera de la ley. Y esto, a pesar de que el alcance de la legislación sobre las relaciones raciales sólo lo puede ser limitado, tal como han demostrado las acciones de Robert Relf. Este, que se declara a sí mismo como un admirador de Hitler, fue encarcelado a principios de mayo, tras haberse negado a retirar un cartel colocado en su casa anunciando "se vende a una familia inglesa". Relf declaró que "el día en que un inglés ha sido encarcelado por haber querido poner a Inglaterra en el primer lugar, es un día triste". La prensa conservadora hizo de Relf un héroe popular! Se colocaron numerosos carteles y se firmaron numerosas peticiones en muchas empresas. Seis semanas más tarde el Gobierno, ambarazado, se las arregló para liberar a Relf, que fue acogido por un comité de recepción fascista triunfante. Relf se unió después al Frente Nacional, organizándose con él una serie de mítines. Aproximadamente en el mismo momento, la policía detuvo a un antifascista en Rotherham por haber pintado la consigna "Negros y blancos, unámonos y luchemos", que ha sido inculpada en nombre del decreto sobre relaciones raciales.

La utilización del racismo por la burguesía británica no es un incidente aislado, aunque tenga el límite que hemos mencionado anteriormente. Es un arma demasiado útil como para que no sea utilizada de nuevo. Incluso si los racistas consiguen la victoria en su batalla contra toda nueva inmigración negra, pueden proseguir su acción hasta obtener el repatriamiento de los negros. Ahora, más que nunca, resulta absolutamente prioritario para los revolucionarios el comenzar a poner en pie una campaña antirracista durable en la clase obrera. Es necesario ganar a sectores de trabajadores a la idea de la autodefensa de los negros, como primera etapa hacia la autodefensa del conjunto del movimiento obrero. Se debe combatir todo control sobre la inmigración. Para explicar esto a los trabajadores que creen que la crisis de los gastos sociales y del desempleo son debidos a la inmigración, es urgente avanzar un programa de acción obrero como solución a la crisis, sosteniendo al mismo tiempo cada acción inmediata contra la ofensiva de los patronos. Los racistas deben ser rechazados del movimiento obrero, y los fascistas, expulsados de las calles.

Si se extrae la lección de los últimos meses, la izquierda británica puede salir reforzada de este periodo. La inmensa fuerza de los sindicatos obreros en la Gran Bretaña no es suficiente como para compensar un nivel político demasiado bajo. La lucha por una corriente de izquierda que sea capaz de romper la ofensiva patronal exige un combate consistente contra las debilidades de la clase obrera, como el sexismo, el chauvinismo antiirlandés y, por encima de todo ello, el racismo.

Andrew Jenkins



El desacuerdo Giscard-Chirac

Pierre Frank

El 25 de agosto, antes de que finalizara el período de vacaciones, J. Chirac abandonaba públicamente su puesto de Primer Ministro, lo que suponía, automáticamente, la dimisión del Gobierno. A excepción del hecho de que el tecnócrata Barre, no afiliado políticamente, se encuentre en el lugar de Chirac, de que tres o cuatro ministros hayan sido reemplazados, y que algunos hayan cambiado de cartera, podría dar la impresión de que no se ha producido nada importante. Sin embargo, este cambio de ministros ha producido una gran emoción en el mundo político de la burguesía francesa. Se supo por los mismos interesados, que Chirac ya había dimitido el 26 de julio, y que si permaneció en sus funciones fue a petición del propio Giscard. Las causas del cambio de ministros ponen también de manifiesto la profundidad de la crisis que se incubaba en Francia.

Al partir, Chirac declaró que lo hacía porque no disponía "de los medios necesarios para asumir eficazmente sus funciones", en otras palabras, que Giscard le había negado estos "medios". Por su parte, éste, después de haber recordado que, según la Constitución, él era el número uno en el país, y que el Primer Ministro le estaba subordinado (lo cual, por otro lado, hacía

de cuestionado por Chirac), añadió que el antiguo Consejo de Ministros no se había mostrado como un equipo coherente, que en la reciente sesión del Parlamento, los partidos habían "ejercido una excesiva influencia sobre su acción gubernamental", reprochando de esta forma a Chirac el haber arrastrado las pies en el momento en que había sido necesario el alineamiento de la UDR, contrario a la aprobación de un proyecto de ley muy querido de Giscard; y, sobre todo, hizo saber que si había existido un desacuerdo entre Chirac y él mismo, al ser el primero partidario de proceder a elecciones parlamentarias anticipadas en el otoño de 1976, mientras que Giscard se inclinaba por esperar al término legal de 1978. La verdadera explicación del cambio de gobierno que se acaba de producir reside precisamente en este desacuerdo, y en las razones que lo han provocado.

Los problemas del régimen bonapartista

Para comprender la profunda significación de este cambio, hay que recordar, primeramente, que la V República tiene una Constitución bonapartista, hecha a la medida de de Gaulle. No es cierto lo que escribía P. Vianson - Ponté en *Le Monde* (26 de agosto) de que, con la salida de Chirac, "es la ruptura del régimen... quizás el fin de la V República... y el advenimiento de la VI República". Nadie ha definido todavía esta VI República; en todo caso, ésta no será el producto de un simple cambio gubernamental, sino de una gigantesca crisis social y política, de grandes enfrentamientos políticos (que podrían ponerse al orden del día mucho antes de lo que se piensa). Entre tanto, el régimen bonapartista ha permanecido después de de Gaulle. Y, además, tal como nosotros habíamos escrito en la época, "un bonapartismo sin Bonaparte". Pero alguien debía ocupar el lugar de Bonaparte, vacío desde la partida de de Gaulle. Han sido y son sub-bonapartes, e incluso sub-sub-bonapartes, quienes lo ocupan o aspiran a ocuparlo — la política, como la naturaleza, tiene horror al vacío —, pero no se transforma en Bonaparte quien quiere: para que se cree eventualmente tal personaje son necesarias circunstancias muy especiales, como la Guerra y la Resistencia. El mismo de Gaulle, que había conseguido jugar ese papel durante años, obteniendo votos de confianza en referendums plebiscitarios, obscurciendo las líneas de demarcación entre las clases, llegando a restarle un millón de votos al Partido Comunista, vió como se quebraba su pedestal tras los acontecimientos de mayo del 68, y no tuvo otra salida que marcharse. Sus sucesores (primero Pompidou, ahora Giscard) han tenido y tienen que hacer frente a un ascenso de las masas, y los referendums les están vetados (Pompidou, que lo intentó, recogió un 60% de abstenciones). En 1974, Giscard fue elegido con menos de un 51% de los votos, y las dificultades económicas, lejos de haber ampliado su base electoral desde entonces, han producido lo contrario.

Además, desde su elección, Giscard no consiguió hacer marchar al mismo paso a las tres formaciones que constituyen su mayoría parlamentaria. Estas saben que, de cualquier manera, sufrirán pérdidas en las próximas

elecciones y se pelean por disponer de las mejores circunscripciones. Las divergencias de esta mayoría, tanto en el Parlamento como en el Gobierno, son una cosa casi cotidiana. Estas diferencias se han agravado engendrando tensiones crecientes entre Giscard y Chirac, a raíz de la derrota sufrida en las elecciones cantonales de marzo último. Estas elecciones no fueron sólo un avance de lo que serán las elecciones municipales de la primavera de 1977, preludio a su vez de lo que serán las elecciones legislativas de 1978. De hecho, la campaña electoral se halla prácticamente abierta, y el problema que se plantea a estos señores es el de cómo evitar la derrota.

Dos proyectos

Este problema no es en modo alguno secundario. Es más que un cambio de mayoría, es el problema planteado por la perspectiva de una elección que podrían conducir a la entrada de miembros del PCF en un gobierno dirigido por Mitterrand. Este ha sido, y es, expresado en las condiciones de Francia, el problema que preocupó a Ford, Kissinger, Helmut Schmidt, Callaghan, Giscard, hacían sólo unos meses en Puerto Rico: el del acceso a funciones de gobierno de ministros comunistas en Europa occidental. Los dirigentes de las grandes potencias capitalistas saben muy bien que los partidos comunistas europeos no tratan de derrocar el régimen capitalista; pero tienen miedo de la dinámica de clase que podría provocar las ilusiones de los trabajadores en la presencia de ministros comunistas, y de la eventual incapacidad de estos últimos para mantener su control.

De qué forma se plantea prácticamente el problema en Francia? En la actualidad resulta evidente que la Unión de la Izquierda no se romperá antes de las elecciones de 1978; esto sería posible después, si ésta no consiguiera una victoria. La mayoría en las elecciones legislativas depende del desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de unos cuatrocientos o quinientos mil votos flotantes, sobre un total de electores de aproximadamente 28 millones, o sea, alrededor de un 2% del cuerpo electoral. Este pequeño número de votos flotantes se sitúa esencialmente en lo que se llaman "las nuevas clases medias", cuyo apoyo se esfuerzan por ganar todos los partidos burgueses y los partidos obreros de masas, PS y PCF.

No existía ningún desacuerdo entre Giscard y Chirac sobre algunos de los medios a emplear para ganar esos votos: por ejemplo, alimentando el miedo denunciando la delincuencia, favoreciendo el racismo y la xenofobia, utilizando a la policía abundantemente, con el pretexto de garantizar la "seguridad" de los ancianos, etc. También se hallaban de acuerdo en tratar de ganar algunos votos mediante subvenciones, subsidios, limosnas, sobre ciertas categorías (campesinos, personas de edad, etc.) El debate era otro. El proyecto de Giscard es proceder a algunas "reformas" de corto alcance, que se correspondan con el espíritu "moderno" de las capas codiciadas, reformas que le parecían suficientes como para hacer bascular de su lado a electores que en la actua-

lidad se hallan atraídos por la Unión de la Izquierda, - pero que, en cualquier caso, tienen miedo de lo desco-
necido que resulta para ellas la llegada de los comunis-
tas al gobierno. Si bien es cierto que estas "reformas",
estas reformillas, disgustan a una gran parte del electo-
rado de la actual mayoría, Giscard piensa que este elec-
torado no podrá hacer otra cosa que votar, a pesar de
todo, a su favor, ante el "peligro comunista".

Chirac hacía otro análisis. Estas "reformas", pen-
saba, lejos de permitir morder sobre el electorado de la
izquierda, no hacen sino alimentar los deseos de más -
reivindicaciones, de nuevas reformas; no aportan los vo-
tos provenientes de la izquierda e incluso hacen perder
votos, por abstención, a la derecha. Esperar a 1978 se-
ría ir derechos a la derrota. Así, con un temperamento
agresivo, proponía bascular la política atentista de la -
Unión de la Izquierda, unificar rápidamente a la mayo-
ría, y proceder a elecciones anticipadas durante el oto-
ño, en un momento en que la reciente atenuación de la
recesión aún será apreciable, y antes de que la situación
se deteriore de nuevo y se sientan los efectos de las me-
didas de austeridad necesarias para combatir la infla-
ción y superar el déficit de la balanza comercial.

Giscard hizo prevalecer su punto de vista, y Chi-
rac se fue; convencido de que la Unión de la Izquierda
va a resultar ganadora, no quiere ser corresponsable. A
quienes se pregunten quién de los dos tenía razón, des-
de el punto de vista capitalista, se les debe responder -
que, en este terreno, no existe la buena y la mala solu-
ción; el problema para los burgueses es escoger la me-
nos mala. En lo inmediato, Giscard obtiene algunas pe-
queñas ventajas, a expensas de la UDR y de Chirac, que
no pueden atacarle abiertamente sin agravar más aún la
situación de la mayoría. Lo más probable es que Chi-
rac, aún expresando sus posiciones políticas en determi-
nadas circunstancias, espere al fracaso de Giscard, que
considera inevitable.

El nuevo Gobierno no ha hecho público aún su pro-
grama detallado. Lo que sí ha hecho saber es que su pri-
mer objetivo será la lucha contra la inflación. En se-
gundo lugar, ha designado la cuestión de la "seguridad"
de la que hemos hablado anteriormente. Se ha "olvida-
do" hablar del desempleo, que en la actualidad se apro-
xima a la cifra de 1 200 000.

El atentismo de las direcciones del movimiento obrero

Después de las elecciones cantonales, las direcciones -
del PCF, del PS y de las centrales sindicales piensan,
al igual que Chirac, que el tiempo trabaja a su favor,
que no hay que perturbar en lo más mínimo a la parte -
flotante del electorado, la cual, por el momento, pare-
cen haber ganado. Frente al conflicto Giscard-Chirac
mantienen una posición casi indiferente: la política de
uno y de otro es la misma, está condenada al fracaso, -
etc. Añadamos a esto que han puesto la sordina sobre
sus diferencias, sin, por otro lado, dejar de dirigirse -
golpes bajos. Al mismo tiempo, para asegurarse con ma-

yor certidumbre una parte de los votos flotantes, Mite-
rrand ha realizado sutiles aperturas hacia Giscard, de-
clarando que no se opondrá obstáculo alguno a que Gis-
card permanezca en la presidencia si la Unión de la Iz-
quierda ganaba en 1978. Lo cual ha provocado algu-
nos refunfuños del PCF, ("Giscard tendrá que someterse
o dimitir"), que no significan nada diferente de lo que
dice Mitterrand.

Por otro lado, con la misma intención, tratan de ga-
narse a una parte de los gaullistas, que se hallan de u-
ñas frente a Giscard por su política exterior, que ya no
es la de la "Europa europea" de de Gaulle, sino la de
la Europa estrechamente asociada a la Alianza Atláti-
ca y a los Estados Unidos. Para conseguir esto, el PCF
propone "la Unión del pueblo de Francia", y cuenta -
con el apoyo abierto de una parte de la dirección del -
PS. Nos parece dudoso que esta política lleve a mucho
gaullistas a votar por el PCF, e incluso por el PS, pero
lo que sí consigue es aumentar la confusión que estos -
partidos siembran en la clase obrera.

Jamás sabremos si el proyecto de Chirac de eleccio-
nes anticipadas, en las condiciones en que él quería ha-
cerlas, hubieran tenido éxito. Pero el cambio de minis-
tros, por el momento, ha dado la vuelta a la situación:
existe flotamiento en la UDR, disturbios en el electora-
do de la mayoría. Las medidas de austeridad contribui-
rán también, en lo inmediato, a crear nuevos descontentos,
en particular entre las nuevas clases medias. De e-
llo se desprende que las direcciones del movimiento ob-
brero tendrían interés en exigir ahora mismo las eleccio-
nes anticipadas. Se les puede preguntar: ¿por qué espe-
ráis a 1978 si tenéis el éxito al alcance de la mano? -
Disponéis de un medio fácil para forzar a Giscard: ha-
ced dimitir a una veintena de diputados socialistas y co-
munistas en circunscripciones escogidas en el conjunto
del país, provocaríais elecciones parciales en las que -
ganaríais con mayorías más amplias, y Giscard no podría
hacerse el sordo. Es previsible que los dirigentes del PS
y del PCF se nieguen a recorrer a tal procedimiento, por
que temen toda agitación política demasiado fuerte an-
tes de la campaña electoral oficial. Les basta con las
manifestaciones limitadas sobre reivindicaciones econó-
micas, mientras que estas no se orienten en dirección a
una lucha por el poder.

El atentismo de las direcciones del movimiento obre-
ro es una cosa. Pero las dificultades económicas aumen-
tan y la austeridad golpeará a todos los que viven de su
trabajo. El nuevo Gobierno se verá forzado a reforzar
la represión contra las masas trabajadoras, a fin de apli-
car su programa. Las luchas son inevitables; algunas ya
se perfilan en el horizonte. Su amplitud, su nivel polí-
tico, no se pueden discernir todavía claramente, pero -
lo más probable es que la situación del Gobierno no sea
en absoluto cómoda. No se puede excluir que, en tor-
no a las elecciones municipales de la próxima primave-
ra, la burguesía experimente una crisis más grave aún -
de la que ha separado a Giscard de Chirac, una crisis
que no se limitará a las esferas gubernamentales.

Pierre Frank



Ante las elecciones

Tom Gustafsson & G. I. Johnsson

El 19 de setiembre se celebrarán las elecciones generales al Parlamento sueco (Riksdagen). Hace unos días, el corresponsal en suecia del Observer comparaba estas elecciones con la célebre carrera de caballos, la steep chace. Resulta imposible de prever quién va a resultar ganador. Todo puede ocurrir. El resultado será una incógnita hasta el último momento, ya que cualquier candidato puede caer en el obstáculo final. La comparación resulta muy exacta. En este momento, los espectadores ya no pueden seguir el desarrollo de la carrera. No sabemos quién es el que va en primera posición.

Una cosa es segura: a los socialdemócratas (SD) les va a resultar muy difícil conservar sus puestos en el gobierno. En el momento de iniciarse la campaña electoral, días antes de las vacaciones de verano, los sondeos de opinión daban a los SD un 38%. Es la primera vez, después de decenas de años, que éstos caen por debajo del 40%. La primera razón de la pérdida de popularidad de los SD hay que buscarla en la serie de escándalos en que se han visto comprometidos, siendo los más conocidos el tráfico de divisas en favor del sindicato de obreros metalúrgicos finlandés, y la huida de Ingmar Bergman de Suecia a causa de un conflicto fiscal. Los sondeos reflejaban el descontento de importantes sectores de las capas medias, que tienden siempre a oscilar entre la SD y los dos partidos burgueses del "centro", los Liberales y el Centro. Estas capas se hallan bastante cansadas de los métodos, frecuentemente torpes, de la burocracia SD.

La cuestión principal que se les planteaba a los políticos SD era el cómo captar los votos de las capas medias. Pero el verdadero problema es, por supuesto, mucho más profundo. La opción real reside entre el desarrollo a más largo término de una cooperación con los partidos burgueses centristas, y el intento de mantener una posición "de izquierda" independiente en el Parlamento. Durante la última legislatura, las dificultades surgidas en el Parlamento les llevaron a una cooperación política con los liberales esencialmente. Durante 40 años, la SD se ha mantenido permanentemente en el gobierno. Durante más de 30, estuvo sola en el mismo. A todo lo largo de este período, consiguió integrar y canalizar las aspiraciones de la clase obrera, gracias a las reformas propuestas y realizadas por el partido. En las primeras batallas electorales, la SD apareció como el partido que defendía los intereses de los trabajadores. Pero, al igual que todos los reformistas, los SD son pragmáticos. Todo lo anterior, combinado con su ideología reformista a largo plazo (situada desde un punto de vista capitalista), la ha hecho tejer fuertes lazos con sectores dirigentes de la burguesía, que han visto que los SD podían servir numerosos de sus intereses. Y, lo que es más importante aún, han podido tejer estos lazos sin perder su hegemonía en la clase obrera!

Este doble apoyo de la SD le estuvo permitido por una expansión económica que respondió a las aspiraciones de amplias capas de trabajadores, a pesar de que tal desarrollo se haya realizado de una forma deformada. El final de esta expansión ha reducido cualitativamente

la capacidad de la SD de conservar la confianza de las masas trabajadoras en su mayoría parlamentaria. La crisis actual de la SD danesa nos suministra un excelente ejemplo de este proceso. Tenemos que decir, sin embargo, que la economía sueca se halla lejos de verse sacudida por una crisis tan profunda como la que se opera en Dinamarca o en otros países del continente. Pero la tendencia general no se resiente menos por ello. Esto ha pesado sobre la política de los SD. Estos se han visto forzados a optar por alternativas de racionalización del sector público, que implicaban una expansión más lenta, aún a pesar de que esto no suponía, todavía, una reducción de los gastos sociales. Y se han visto obligados a mantener a los sindicatos en una actitud defensiva pese a que, por el momento, hayan podido evitar la imposición abierta de una política de rentas.

Un partido petrificado

Cuarenta años de administración del Estado capitalista han dejado su huella sobre la estructura organizativa y la composición social del partido. Hubo un tiempo en que éste no sólo organizaba a la clase obrera, sino que también la movilizaba. Hoy día, la mayoría de los miembros militantes del partido provienen de otras capas sociales. Un estudio del origen social de los cuadros y de los funcionarios del partido demostró que, incluso a nivel regional, son menos de un 20% los que provienen de la clase obrera. Más del 50% pertenecen a las capas medias, y alrededor del 20% a las superiores de la pequeña burguesía. En conjunto, el 83% de los miembros del partido son obreros, debido al sistema de adhesiones colectivas practicada en la mayoría de los sindicatos. Esta selección social de los miembros activos del partido se debe a sus estrechas relaciones con el aparato del Estado. Numerosos dirigentes y funcionarios no son más que *apparatchiks* invertidos en el propio aparato del Estado, o en las actividades del partido di-



Resultados de las elecciones de 1973

Partido Conservador	
Partido Liberal	
Partido del Centro	total 48,8%
Social Democracia	
Partido Comunista	total 48,9%

Encuestas en agosto de 1976

Partido Conservador	17%	
Partido Liberal	12%	
Partido del Centro	22%	total 51%
Social Democracia	42,5%	
Partido Comunista	4,5%	total 47%

rectamente relacionadas con éste. Todo ello, combinado con la ausencia de bases materiales de diferenciación política con los partidos burgueses, así como la inexistencia de fuertes polarizaciones (como ocurrió durante los años cincuenta y sesenta), esta ausencia de militantes activos en las empresas y en los lugares de trabajo, ha hecho difícil la movilización de amplias capas de miembros del partido para apoyar el programa del gobierno.

Son, pues, un conjunto de fenómenos estrechamente interrelacionados entre sí, los que explican las dificultades con las que se han enfrentado los SD durante esta campaña electoral. No se trata para ellos simplemente de reforzar sus lazos con la clase obrera y mantener una influencia sobre las capas medias, sino que tienen que hacerlo en unas condiciones sociales, a la vez nuevas y más difíciles, y en el momento en que el partido se halla más cortado que nunca de la clase obrera.

La solución temporal

Los SD han emprendido la campaña en pleno desarrollo de ésta. Parecía como si no contaran ni con un plan, ni con coordinación alguna. De hecho, las diferentes personalidades dirigentes parecían llevar también campañas diferentes. En consecuencia, se veían incapaces de avanzar una perspectiva clara y suscitar la movilización entre los militantes y su electorado. El bloque parlamentario del partido se hallaba preocupado especialmente por los votos de las capas medias, votos que oscilan entre la SD, los Liberales y el Centro. Los burócratas sindicales y los pequeños funcionarios del partido manifestaban un mayor deseo de desarrollar lazos entre el partido y los trabajadores. Estos se hallan particularmente inquietos por la incapacidad del partido para canalizar las aspiraciones de amplias capas de trabajadores, tal como ocurría en el pasado. Estas aspiraciones se han expresado con más insistencia cada día fuera del marco ofrecido por la SD y los sindicatos, bajo la forma de huelgas salvajes y otros movimientos. La solución adoptada por la dirección del partido ha sido la división del trabajo entre las diferentes secciones del movimiento SD. Mientras que los sindicatos, que no pueden ignorar las realidades políticas" (para utilizar la expresión

sión del presidente de la Federación de Sindicatos), tienen que dirigir su campaña hacia la clase obrera, el partido puede ocuparse de obtener la adhesión de las capas medias.

El eje principal de la campaña de la Landsorganisationen (LO, Federación Nacional de los Sindicatos) habla del "poder en los lugares de trabajo", mientras que el Primer Ministro, Olof Palme, habla de la seguridad para las personas de edad, las guarderías y el interés nacional. Un ejemplo de esta división de las tareas se puede encontrar en los propósitos mantenidos por Palme en uno de los principales periódicos burgueses del país. En sus declaraciones afirmaba que la LO era un grupo de presión, mientras que el partido tomaba en consideración a todas las fuerzas sociales y, en consecuencia, tenía que mantener su independencia frente al movimiento sindical. La importancia de estas manifestaciones no debe ser sobreestimada, pero, en cualquier caso, no tienen precedentes en la historia moderna de la SD.

Es probable que, mediante estas medidas, la SD consiga recuperar una gran parte del electorado que había perdido al inicio de la campaña. Lo que queda por ver es si la recuperación será suficiente. Además, la táctica de la dirección, que tiende a resituarse en el centro de la vida política sueca, le impide responder a las aspiraciones de sectores importantes de la clase obrera. En lugar de resolver sus problemas, la SD no hace sino aplazarlos. Han encontrado una solución temporal que les permitirá, quizás, franquear la cota del 19 de septiembre. Lo que queda por saber es si podrán sacar ventajas también de su posible victoria.

La burguesía: sueños secretos y proyectos realistas

"Estar, pero sin ser visto", éste ha sido el leimotiv que ha guiado la actuación del capital sueco en la escena política durante mucho tiempo. La aplicación con gran éxito de esta máxima les ha sido posible durante los 40 años de reinado de la SD. Los sectores económica, política e ideológicamente dirigentes de la burguesía han mantenido incluso buenas relaciones con la SD. Igualmente, la SD pudo jugar el papel de intermediaria entre su base de masas parlamentaria y las necesidades del gran capital. Pero una de las precondiciones necesarias para este equilibrio era la expansión económica, sin la que la SD no habría dispuesto de la base material necesaria para aplicar su política. Y es precisamente esta precondición la que se ha ido erosionando.

Las personalidades dirigentes de la burguesía son conscientes de los problemas que esto plantea para el futuro. Una de éstas, Lars Eric Thunholm, director general del banco comercial sueco de mayor importancia (la Skandinaviska Enskilda Banken), escribía en un artículo del diario conservador Svenska Dagbladet: "Desde el momento en que no podemos evitar la inflación, tenemos que aprender a vivir con ella, incluso a pesar de las consecuencias absolutamente desagradables que esto tenga. En cuanto a la futura sociedad de inflación, ésta

no puede ser democrática en el sentido tradicional del término: democracia e inflación no pueden convivir. Es necesario un régimen autoritario para permitir a la sociedad adaptarse a la inflación (...). Si no podemos detenerla inflación, tendremos que desembarazarnos de la democracia. Tal cambio no puede operarse, evidentemente, de un solo golpe, pero ha de venir gradualmente. Diversas reglamentaciones gubernamentales, el control de los precios, subsidios, medidas fiscales, etc., van a minar progresivamente la economía de mercado... En este marco, se debe de recordar que el movimiento obrero organizado es uno de los grupos sociales poderosos. Tarde o temprano, este proceso debe conducir a una confrontación entre, de un lado, el régimen político, que debe asegurarse cada vez más su poder autoritario, y del otro los sindicatos. Esta confrontación precisamente es la que se está operando hoy en día en varios países europeos".

Thunholm habla del porvenir. Plantea que es preciso avanzar prudentemente. Sabe que sus ideas no pueden concretarse en la Suecia de hoy. La burguesía todavía no está dispuesta a romper sus relaciones con la SD. De hecho, se trata de tatear el terreno político, para encontrar nuevas vías; para comenzar a discutir una dirección de recambio para el futuro. Vemos cómo el capital ha iniciado el abandono de su máxima "estar sin ser visto". Para ello, ha comenzado a utilizar sus propias organizaciones, como la Asociación Patronal y la Liga Industrial, a fin de asegurarse una intervención política directa. En la primavera última hemos visto un ejemplo de ello, cuando la Liga Industrial presentó su opinión sobre la política económica del gobierno en un programa de ocho puntos. El contenido de este programa contenía restricciones de los servicios sociales, la congelación de los salarios, y un considerable esfuerzo para hacer más rentable a la industria. El desarrollo de estas ideas no resulta nada fácil para la burguesía. Los partidos burgueses no pueden jugar este papel estando como están prisioneros del marco parlamentario. Por el contrario, si quieren tener una posibilidad de hacer la función de intermediarios entre el gran capital y las amplias masas, tienen que convertirse en mayoritarios en el Parlamento. Pero para conseguir esto tienen que ser capaces de captar el descontento de importantes grupos de asalariados, frente a la política del gobierno SD, en la periferia de la clase obrera, y en sectores de las clases medias. Pero, de hecho, esta insatisfacción no es un producto de las exigencias del bloqueo salarial y de la reducción de los gastos sociales del gran capital, sino que se debe, más bien, al peso de los impuestos y a las extremadas formas de burocratismo del aparato SD.

Dilema para un gobierno burgués

La política de los partidos burgueses tiene algunas posibilidades de éxito en las elecciones del 19 de septiembre. Pero esta política no puede, ni responder a las exigencias de la patronal, ni reducir las luchas políticas y económicas de los trabajadores. Un gobierno burgués se enfrenta incluso con mayores dificultades que un gobierno SD. De un lado, las esperanzas de la burguesía se

rían muy fuertes; por el otro, tal gobierno tendría grandes dificultades para debilitar y canalizar las luchas obreras. Esto resulta particularmente cierto en lo que concierne a las negociaciones por los contratos nacionales, que deben comenzar justamente después de las elecciones. Algunos portavoces directos de la patronal — o de los partidos burgueses — son muy conscientes del problema. Curt Steffan Gisecke, presidente de la Asociación de la Patronal sueca, ha subrayado lo mucho que serviría un gobierno SD probablemente para hacer disminuir la tensión durante las negociaciones contractuales. Gunnar Heckscher, antiguo presidente del partido conservador, planteó el problema en estos términos: "Existen una serie de dificultades particulares que un gobierno no socialista debería estudiar. Entre las más importantes, se halla la falta de experiencia gubernamental, las relaciones con los sindicatos y las demás organizaciones económicas, la actitud de los funcionarios y las relaciones con los sindicatos y las demás organizaciones económicas, la actitud de los funcionarios y las relaciones con los medios de comunicación de masas... Los sindicatos se limitarían a las acciones profesionales, o, siguiendo el ejemplo de lo que ha ocurrido en Gran Bretaña hace algunos años, intentarían utilizar la acción sindical para sabotear el trabajo del gobierno? Por otro lado, la patronal y las organizaciones sindicales, se controlarían, o se dejarían arrastrar por la seducción de avanzar exigencias que el gobierno no podría satisfacer sin cometer un suicidio político?"

En consecuencia, una victoria electoral burguesa — el 19 de setiembre, tampoco resolvería más fácilmente las actuales dificultades de la burguesía que un gobierno SD. Por esta razón, el gran capital no ha querido hacer valer todo su peso en el sentido de un cambio ministerial.

Dilema para un gobierno socialdemócrata

En lo fundamental, resulta evidente que un gobierno SD se vería confrontado con el mismo dilema. Tendría también que encontrar una vía intermedia entre las esperanzas de la clase obrera y las necesidades de la economía capitalista. "Para los asalariados, independientemente de los resultados del 19 de setiembre, se aproxima un período difícil", declaró hace tan sólo unas semanas Gunnar Sträng, ministro SD de finanzas, en una entrevista televisada. La dirección sindical ha repetido lo mismo en previsión de las negociaciones de los contratos nacionales: "Las reivindicaciones deben de mantenerse en el mínimo". Pero aunque el dilema sea fundamentalmente idéntico, un gobierno SD presenta la ventaja de poder utilizar su influencia política en la clase obrera. Este gobierno trataría de calmar la tempestad mediante sus propuestas de reforma para "la participación en las decisiones" de las empresas. A través de una intensa propaganda ideológica por el objetivo a largo plazo de un "gobierno obrero", trataría de limitar las luchas salariales.

La mayoría de los trabajadores suecos consideran al gobierno SD como "su" Gobierno. Durante 40 años han

sido acostumbrados a ver a "su" partido en el poder. De elección en elección, la clase obrera ha sido movilizadada para "defender sus adquisiciones" y hacer posibles "nuevos avances". Un cambio de gobierno sería resentido por ella como una derrota, ya que esto significaría que los trabajadores se habrían vuelto pasivos, se habrían abstenido, o habrían votado por los partidos burgueses. Pero nada permite pensar que un cambio de gobierno tendría mayores consecuencias que un apaciguamiento muy temporal de las luchas obreras, que, en estos últimos años, han sido particularmente amplias. Si el gobierno SD fracasa, será por su culpa, y únicamente por la suya. Fracasaría porque su política ha sido incapaz de movilizar el entusiasmo de los militantes de su propio partido, y porque ha decidido desviar su atención hacia "el centro político de la vida sueca", según la expresión de Palme.

La opción a la que se enfrentan los revolucionarios durante las elecciones no es, por consecuencia, la elección entre un gobierno burgués o la política burguesa de un gobierno SD. Más bien es preciso mostrar que existe una tercera alternativa, susceptible de ofrecer a Thunham y a sus amigos un verdadero combate por la sociedad futura. En esta perspectiva, la Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF, Liga Comunista de los Trabajadores), sección sueca de la IV Internacional, participa en las elecciones presentando sus propios candidatos. La KAF ha sido acusada de ayudar a la burguesía, de este modo, a ganar la mayoría. Esto no tiene, evidentemente, ningún sentido. Si los SD pierden, será porque su política burguesa no ofrece ninguna solución a los problemas a los que los trabajadores se hallan enfrentados. Ellos han sido quienes han escogido el apoyarse más en la economía capitalista, que en la fuerza organizada del movimiento obrero. En lugar de construir y reforzar el movimiento, lo han desarmado con una legislación antiobrera, con una política de colaboración de clases a todos los niveles, y por medida burocráticas, cuyo objetivo era la desmovilización de los trabajadores.

Nosotros no queremos un gobierno burgués. Pero, mientras que los SD puedan continuar desarmando al movimiento obrero, el peligro de un gobierno burgués estará presente. De hecho, esta amenaza se hará cada vez mayor. Para nosotros, la mejor forma de combatir este peligro, es contribuir a superar la pasividad y la desmoralización del movimiento obrero, reforzar nuestras organizaciones de clase, trabajar en la constitución de un movimiento obrero democrático y combativo. Esta es la única vía que puede crear la base de un auténtico gobierno obrero, capaz de hacer frente a la burguesía, y de defender las necesidades de la clase obrera.

Nosotros no vamos a obtener muchos votos — algunos millares, quizás. Pero algunos millares de votos en los sindicatos, en los movimientos de solidaridad y en las localidades, contribuirán muy significativamente a dar un paso adelante hacia el rearme del movimiento obrero, por la lucha contra el capitalismo y por el socialismo.

Tom Gustafsson & G.I. Johanson



La izquierda progresa

F.G. Casillas

El pasado 27 de junio, en un mitin central en la ciudad de México, se cerró la campaña electoral de la izquierda. Más de 15 000 personas en la Arena México dieron fin al último acto de la campaña cantando la Internacional y enarbolando cientos de banderas rojas. En el presidium, junto a los dirigentes del Partido Comunista Mexicano y el Movimiento de Organización Socialista, se encontraban a su vez los dirigentes de la Liga Socialista y de la Liga Comunista Internacionalista, representando al fuerte y combativo contingente de la IV Internacional, constituido por más de 1 000 camaradas que ocupaban parte de la Arena. Terminó así la campaña electoral más importante que haya organizado la izquierda en México en por lo menos 40 años.

Pero la importancia de la campaña que presentó al militante del PCM, Valentín Campa, como candidato a la presidencia de la República desborda el mero hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, partidos de la izquierda participaran en elecciones. Sobre todo, la importancia de esta experiencia radica en que, pese a la poca influencia de masas de la izquierda mexicana, la candidatura de Campa fue la única verdadera alternativa a la del candidato del partido-gobierno. Al mismo tiempo, la campaña evidenció ante grandes sectores de masas el carácter antidemocrático del régimen al negar todo derecho legal a los partidos verdaderamente de opo-

sición.

En efecto, la antidemocrática Ley Electoral mexicana establece una serie de requisitos tales para otorgar el registro legal a todo partido —y, por lo tanto, el derecho a participar en las elecciones— que, en la práctica, deja sólo en manos del gobierno la decisión de qué partido es legal y cuál no. De este modo, desde su consolidación después del cardenismo, el régimen bonapartista sólo otorga el registro legal, además de al partido de la "revolución hecha gobierno", PRI (Partido Revolucionario Institucional), a los partidos adictos a él.

La crisis de los partidos burgueses

La presencia de la izquierda organizada en las elecciones presidenciales ha acelerado la crisis de los partidos burgueses, que son utilizados para dar la apariencia de un régimen democrático y pluripartidista. Frente a la candidatura comunista, el PAN (Partido de Acción Nacional), el PPS (Partido Popular Socialista) y el PARM (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) tenían que hacer un esfuerzo por aparecer ante las masas como partidos de oposición al régimen.

La crisis fue primero en el PAN. Este partido, fundado por los sectores más atrasados de la burguesía como una respuesta a las medidas antiimperialistas del régimen de Cárdenas, había conocido, sin embargo, un cierto desarrollo cuando aprovechó demagógicamente el desprestigio del PRI después de la masacre del 68.

Por otro lado, el PPS y el PARM tampoco lanzan candidato propio, y apoyan a José López Portillo, el candidato del PRI. En el caso del PARM no es sorprendente, pues más que partido, es una agencia de empleados en el gobierno, que en sus 20 años de existencia ya más ha apoyado a otro candidato que no sea el del PRI.

Al mismo tiempo que esto sucedía, el gobierno se negó a dar registro al PCM y ni siquiera aceptó registrar a Valentín Campa como candidato independiente. Nada como hoy las elecciones en México se habían presentado con tanta evidencia como una farsa. Legalmente, el 4 de julio el electorado mexicano no contaba más que con una opción: José López Portillo. Más que elecciones, el gobierno del PRI ofrecía un referéndum al designar desde antes del 4 de julio a López Portillo como el sucesor de Echevarría.

Y sin embargo, sí hubo otra opción. El voto de Campa constituyó un voto de clase contra clase y un voto que denuncia la falta de libertades democráticas de un régimen que niega la legalidad a todas aquellas fuerzas que no estén dispuestas a aglutinarse, como todos los partidos legales, en torno al candidato burgués.

Fue por estas condiciones que, evidentemente, la presencia de la izquierda constituyó el elemento más im-

portante de las elecciones del 76. Sin la candidatura de Campa, la sucesión presidencial no hubiera tenido mayor transcendencia. Por eso, el debate en el seno de la izquierda sobre la táctica a adoptar en las elecciones fue tan agudo y también tan importante.

El debate en la izquierda

La experiencia electoral de la izquierda en México era muy pequeña y negativa. Prácticamente toda esa experiencia y tradición está ligada al PCM. Después de haber lanzado a Hernán Laborde como candidato a la presidencia en los años treinta, el PCM no había presentado candidatos oficialmente y, por el contrario, apoyó a los del PRI, como en el caso de Avila Camacho y Miguel Alemán.

Por otro lado, después del 68, ante el debilitamiento de la izquierda, la actitud predominante fue la de llamar a la abstención y a denunciar las elecciones del 70 y 73 (a presidente y diputadas, respectivamente) como una farsa. Estas posiciones coincidían con el desinterés creciente de la población por las elecciones y su desilusión ante la frustración provocada por diversos fraudes electorales organizados por el gobierno contra candidatos de oposición al PRI que fueron apoyados masivamente.

Es decir, cuando en 1975 se inició el debate sobre la práctica electoral de la izquierda, no sólo no se contaba con experiencia, sino, por el contrario, había, como en otros países latinoamericanos, una gran tradición abstencionista y una gran desconfianza hacia esta táctica de lucha.

La experiencia del pasado hacía que en muchos sectores radicalizados la táctica de participación electoral fuera entendida como sinónimo de conciliación y claudicación ante el enemigo de clase. El peso muerto que representaba el abstencionismo tocó a todas las corrientes de izquierda. En este sentido, aunque difiriendo con la táctica particular a impulsar, desde un principio las organizaciones que se reclaman de la Internacional en México estuvieron de acuerdo en la conveniencia de la participación electoral en esta coyuntura y dieron una lucha contra las corrientes ultras y sectarias que se hicieron presentes especialmente en el movimiento estudiantil.

El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), fundado después de la matanza del 10 de junio del 71 por algunos dirigentes del movimiento del 68, como Humberto Castillo y por el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, después de algunas vacilaciones, finalmente decidió abstenerse de participar electoralmente. Recogiendo algunos slogans del movimiento estudiantil, quisieron darle una cobertura izquierdista a su decisión, que en el fondo era profundamente reformista y electoralista. Afirmando que no estaban dispuestos a "hacerle el juego al gobierno", se negaban a participar debido a que se les había negado el registro legal y que, por lo tanto, sus votos no serían contabilizados. De hecho, el

PMT era la única organización de izquierda que había hecho en los últimos años un esfuerzo por reunir los requisitos que la ley exige para otorgar el registro. Concebido como un partido electoralista y con una línea reformista y gradualista, el PMT mantenía cierta coherencia al negarse a participar electoralmente cuando el gobierno le negó todas las garantías para su participación. De todos modos, la decisión no dejó de ser difícil para una base partidaria que había sido educada para la participación electoral y cuyo trabajo central en los dos últimos años había sido la afiliación masiva que garantizaba el número de miembros requeridos por la Ley para ser registrado legalmente. Por lo menos un pequeño sector sindical del PMT rompió con el partido cuando se decidió la abstención. Este sector se pasó al PCM para poder lanzar a uno de sus dirigentes sindicales como candidato a diputado.

Después de haber intentado acuerdos con el PPS, el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y el PMT, el PCM finalmente tuvo que integrar la Coalición de izquierdas sólo con la LS y el MOS.

La Coalición de la Izquierda

Si hemos dicho que las elecciones del 76 estuvieron determinadas fundamentalmente por la presencia de la izquierda, al mismo tiempo tenemos que precisar que fueron determinadas centralmente por la Coalición de izquierdas del PCM, LS y MOS. Fue esta coalición la que, objetivamente, constituyó el punto de referencia de todas las corrientes políticas. El debate sobre qué actitud tomar ante las elecciones tuvo su eje en la política de la Coalición.

El abstencionismo tradicional en la izquierda fue puesto en crisis por la candidatura de Campa. Pese a su concepción electoralista, el PMT fue desbordado por la Coalición de Izquierda. La principal corriente centrista —la agrupada alrededor de la revista *Punto Crítico*, empezó definiéndose por el abstencionismo bajo el slogan de "nuestro candidato (Marx) no tiene registro", para terminar el 27 de junio —el día del cierre de la campaña— llamando a votar por Campa. Una semana antes de las elecciones! Un giro tan sorprendente no fue superado más que por el que dio el grupúsculo posadista, que primero llamó a votar por Campa, para una semana después llamar a votar por López Portillo! Su autocrítica reconocía que el error había sido corregido gracias a una carta del "camarada J. Posadas".

El desprestigio del PCM entre ciertos sectores de la vanguardia amplia hizo que se levantaran muchas críticas a la Coalición, que eran realmente sectarias. Por ejemplo, la acusación de que la Coalición era un frente popular con ciertas fuerzas burguesas. No negamos que el PCM es tuvieran interés en ello. Su política es acorde con tal interés. Incluso hemos dicho que antes de integrar la Coalición, el PCM intentó un frente popular con ciertas fuerzas burguesas. Pero ante el rechazo de dichas fuerzas, se vio obligado a un acuerdo sólo con la LS y el MOS. Por eso, la Coalición de Iz-

quiera no fue un frente popular.

No basta con un programa reformista, o el PC dís - puesto a ponerse a la cola de la "burguesía democrática" es necesario un elemento clave para poder hablar de un frente popular: la presencia de una fuerza significativa en la coalición. Dicha fuerza no existía. El MOS no es más que un grupúsculo reformista en proceso de asimilación por el PCM, y evidentemente que la fuerza hegemónica en la coalición era éste.

Más sectaria aún, y sin fundamentos, era la crítica hecha a la LS en el sentido de que rompía principios al firmar plataformas y hacer bloques electorales con otras organizaciones políticas, especialmente el PCM. Para no hablar de la experiencia de los bolcheviques, haciendo frentes electorales con los mencheviques, es evidente que hay ejemplos más cercanos a nosotros, en la misma IV Internacional, que muestran esta posibilidad. Por ejemplo, en 1958, la organización trotskista americana, el Socialist Workers Party, llamó a crear una "coalición electoral de fuerzas socialistas para una acción política unificada de los socialistas", según explicaba el camarada J. P. Cannon en un mitin, en el que también estuvo presente Vincent Hallinan, que había sido candidato presidencial del Progressive Party.

Por el contrario, es aún más importante destacar la transcendencia de que el PCM hubiera hecho un bloque electoral con una organización de la IV Internacional. El acontecimiento es señal de los nuevos tiempos que vivimos. El PCM ya no puede calumniar a los trotskistas calificándolos de agentes, sino que incluso hace bloques electorales con ellos. En este contexto adquiere relevancia el hecho de que el mismo Valentín Campa, en una entrevista de prensa en el periódico *Excelsior*, hecha pocos días antes de las elecciones, reconoce que en 1940 fue expulsado del PCM por oponerse al asesinato de Trotski (no por otra razón, sino porque consideraba a Trotski "liquidado políticamente"). Oposición, el órgano oficial del PCM, aún más audazmente, afirma en una nota biográfica sobre Campa que, en el periodo en que él estuvo fuera del PC, él representó la verdadera "tradición comunista". Por ello, al mismo tiempo en que algunos denunciaban a la LS como capitulando al estalinismo, una escisión derechista del PCM prosoviética lo denunciaba por capitular ante el trotskismo!

El frente de la izquierda revolucionaria

La otra organización de la Internacional en México, la LCI, no participó en la Coalición. Su negativa a ello se debió a las razones sectarias a que antes se hizo referencia. La crítica de la LCI a la Coalición de Izquierda era en relación a la plataforma que ésta levantó.

La LCI llamó a formar un Frente de la Izquierda Revolucionaria en torno a un programa revolucionario. No llamó a lanzar otro candidato, sino a apoyar a Valentín Campa, expresando así un voto de clase contra clase. Pero al mismo tiempo llamaba a votar por un programa alternativo al de la Coalición por medio de la fórmula - FIR-Campa.

Sin embargo, el proyecto de la LCI de agrupar a la izquierda revolucionaria no tuvo éxito. Estando de acuerdo incluso con la plataforma electoral que la LCI proponía para el FIR, la gran mayoría de las corrientes - centristas se negaron a participar conjuntamente con la LCI debido a la determinación de ésta de llamar a votar Campa. El sectarismo de los centristas hacia el PCM les aisló y debilitó más en esta importante coyuntura, pero también impidió que más fuerzas se aglutinaran con la LCI en el FIR.

La sobreestimación que la LCI hizo del centrismo - de izquierda tuvo su contrapartida en una sobreestimación del PCM. La única peculiaridad del PCM es su relativa debilidad. Es esta debilidad y no un supuesto carácter revolucionario lo que le impidió concertar un frente popular. Es también esta relativa debilidad la que le obliga a negociar con organizaciones de la IV. Evidentemente que una negociación para un frente electoral entre el PCM por un lado, y la LCI y la LS por el otro, hubiera sido más favorable para estas últimas, incluido en lo referente al contenido de la plataforma electoral.

Lo anterior se desprende del análisis de las relaciones de fuerzas actualmente en la izquierda organizada en México. En el proceso de recomposición habido en el seno de la izquierda en los últimos dos años, destacan tres corrientes como hegemónicas: el PCM, el PMT y la IV Internacional. La no comprensión total de lo que implicaba este reacomodo de las fuerzas de la izquierda, hizo que la LCI intentara inútilmente aglutinar al centrismo, cuando podía haber tenido una participación más audaz en relación a la Coalición, y especialmente hacia el PCM.

Los resultados de las elecciones del 4 de julio - aún cuando no reconocidos oficialmente - reflejan el ascenso de la lucha de las masas mexicanas: más de un millón de votos por Campa! Es decir, más que los votos que consiguieron juntos el PPS y el PARM por López Portillo. La importancia es aún mayor si se toma en cuenta que son votos por una candidatura de izquierda, por una candidatura declaradamente comunista, lo que, en México, después de décadas de control priista, significa mucho. Los resultados electorales no sólo reflejan el ascenso de las luchas, especialmente obreras, sino la influencia que la izquierda empieza a tener entre ellas. Esa influencia se amplió considerablemente durante la coyuntura electoral. Por supuesto que quien más provecho sacó de la experiencia fue el PCM, fundamentalmente por su mayor aparato. Pero no fue el único que sacó provecho. Ciertamente que, como se demostró en esta coyuntura, en las cada vez más importantes luchas que se aproximan para el futuro inmediato en México, el PCM no será ya la única opción viable en la izquierda. Lenta pero firmemente, la alternativa marxista revolucionaria también se fortalece. El gran salto en este sentido lo constituirá la ya cercana fundación de la sección mexicana de la Internacional, con la unificación de la Liga Comunista Internacionalista (LCI) y la Liga Socialista (LS).

Felipe García Casillas

CAMARADA

ROBERTO SANTUCHO



La IV Internacional denuncia el asesinato del camarada Mario Roberto Santucho —dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina—, perpetrado por la dictadura militar sanguinaria, la misma que ha encarcelado a millares de trabajadores, de militantes obreros, y asesinado a decenas de ellos desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El camarada Santucho era una figura simbólica para toda una generación de militantes, que se unieron al movimiento revolucionario en la Argentina bajo la influencia de la revolución cubana, y que sacrificaron sus vidas por lo que ellos consideraban la orientación revolucionaria más correcta. Santucho compartía con ellos una entrega sin límites a la lucha de liberación nacional y social de los explotados y oprimidos, una convicción profunda de que esta liberación no podía eliminarse sino a través de la revolución socialista, la creencia de que la lucha armada prolongada constituía la única vía posible para asegurar la victoria de la revolución, y un compromiso personal absoluto frente a todas las implicaciones políticas y organizativas que se derivan de tal orientación.

En tanto que dirigente de un grupo revolucionario populista —el FRIP, Frente Revolucionario Indioamericano Popular, implantado en su provincia natal—, Santucho se mostró favorable, en 1967, a la fusión con el grupo Palabra Obrera, sección argentina de la IV Internacional. Aceptó de esta forma la adhesión de la organización que surgió de la fusión, el PRT, a la IV Internacional. Lo hizo sin estar convencido de la justeza del programa marxista revolucionario, a partir de una profunda adhesión al internacionalismo. Resentía la necesidad de una organización internacional, pero insistía en su preferencia por un reagrupamiento "ecuménico", que incluyera a los PC vietnamita, chino y norcoreano, algunos partidos maoístas, el PC cubano, las principales fuerzas de la guerrilla en América Latina, y la IV Internacional. La práctica demostró que no era posible la unificación de fuerzas políticas tan divergentes. En el seno del PRT surgieron muy pronto divergencias políticas que condujeron a una escisión, a principios del año 1969. Un ala del PRT formó el PRT-La Verdad, que más tarde se fusionó con un sector del Partido Socialista para formar el PST (Partido Socialista de los Trabajadores), que permaneció en el seno de la IV Internacional. La otra tendencia, bajo la dirección de Santucho, formó el PRT-Combatiente, que en principio manifestó su voluntad de permanecer en la IV Internacional y pidió su reconocimiento en tanto que sección argentina, en el IX Congreso Mundial. Dadas las circunstancias estatutarias de la escisión, su petición fue aceptada. Sin embargo, la dinámica política de la escisión se afirmó a largo término decisivamente. La lógica de la orientación del PRT-Combatiente, "la guerra popular prolongada", puso en evidencia las diferencias políticas y programáticas. El camarada Santucho rompió públicamente con la IV Internacional en 1973.

En tanto que dirigente del PRT y del ERP, Mario Roberto Santucho se esforzó, con una resolución férrea, en infligir golpes al ejército burgués argentino, mediante acciones de pequeñas unidades armadas. Esperaba que, según los ejemplos chino y vietnamita, las masas de trabajadores y de campesinos se unieran a este primer núcleo, y, en el transcurso de la lucha, se construyera un partido revolucionario de masas. Esperaba constituir verdaderas zonas liberadas en el Norte del país, y consagró a ello grandes recursos, sacrificando a numerosos militantes para reunir la infraestructura adecuada.

La IV Internacional tiene divergencias irreconciliables con esta estrategia, que borra al papel central de la organización y de la acción de clase independiente del proletariado en el proceso de revolución permanente, lo mismo que la necesidad de construir el partido sobre esta base programática. Pero nosotros deploramos la muerte de este dirigente revolucionario de talla impresionante, que ha dado su vida por la liberación de las masas trabajadoras de su país y de su continente. El proletariado argentino vengará a Mario Roberto Santucho, como a todos los combatientes por la revolución socialista asesinados por la burguesía argentina y sus verdugos, derrocando a la dictadura y la dominación capitalista en la Argentina.

Secretariado Unificado de la IV Internacional

CAMPAÑA DE APOYO

inprecor

Estimados lectores :

A finales de setiembre, INPRECOR tiene necesidad de 5000 US \$ (25.000 FF, 350.000 pts) para poder asegurar su publicación regular.

El primer número de INPRECOR apareció en mayo de 1974, publicándose simultáneamente en tres lenguas, inglés, francés y castellano. Rápidamente se añadió a estas una edición en alemán.

INPRECOR fue lanzado con la intención de ofrecer una información precisa y un análisis marxista revolucionario — el de la IV Internacional — del movimiento obrero y de los acontecimientos políticos mundiales. Su éxito fue real. Más de 10.000 lectores de los cinco continentes utilizan actualmente este instrumento de información y de formación política.

En el momento en que la lucha de clases a escala mundial adquiere nuevas dimensiones, INPRECOR tiene que lograr desarrollarse a un nivel superior. Ahora bien, actualmente, INPRECOR tiene que hacer frente a una crisis de liquidez, exacerbada tanto por una fuerte y repentina subida de las tarifas postales como por los efectos del período estival en sus ventas, sus suscripciones, etc. No resulta exagerado afirmar que esta crisis financiera puede poner en peligro la publicación regular de INPRECOR, tanto más si se tiene en cuenta que próximamente tenemos que publicar un número de 64 páginas, consagrada a la situación económica internacional.

Estimados lectores, vosotros podéis ayudarnos a hacer frente a estas dificultades momentáneas. Tenemos que reunir los 5.000 dólares antes de finales de este mes. Estamos seguros que los lectores de INPRECOR nos permitirán alcanzar este objetivo !

Enviad vuestra ayuda, con la mención "Apoyo a INPRECOR" a :

Gisela Scholtz, Société Générale de Banque, Agence Dailly 1030, Bruxelles, cuenta corriente N. 210-0320173-28.

Para Francia, enviad los cheques, con la misma mención, a Pascal Henri, Rouge, 2 Richard-Lenoir, 93100 Montreuil.

5000 \$

antes de finales de setiembre

UAB
Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General
CEDOC

Editeur responsable : René Gros Lambert, 34 rue Nothomb, 1040 Bruxelles